

La sociedad y el Estado en el desarrollo de la Argentina moderna

TORCUATO S. DI TELLA
CRISTINA LUCCHINI
(compiladores)

En este libro se reúnen materiales para el estudio de la sociedad y el Estado en una Argentina considerada como integrante de América latina. Para la comprensión de esta realidad es necesario vincular permanentemente el análisis teórico con el conocimiento de situaciones históricas concretas estudiadas con cierto detalle. Se trata de hacer un aporte en los dos elementos de esta ecuación, dado que el objetivo es acercar al lector tanto trabajos teóricos como históricos para la comprensión de la problemática argentina, en lo posible comparada con la de otros países latinoamericanos.



9 789507 861383

\$18.00

Editorial Biblos

TORCUATO S. DI TELLA / CRISTINA LUCCHINI
(compiladores)

La sociedad y el Estado en el desarrollo
de la Argentina moderna

La sociedad y el Estado en el desarrollo de la Argentina moderna

TORCUATO S. DI TELLA
CRISTINA LUCCHINI
(compiladores)

Editorial Biblos

AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA,
1955-1983*

Marcelo Cavarozzi

INTRODUCCIÓN

El periodo abierto a partir de la insurrección militar que puso fin al gobierno peronista, en 1955, se caracterizó por la inestabilidad política. Ninguno de los tres gobiernos constitucionales del periodo llegó a completar su mandato, mientras que las tres administraciones militares anteriores a la actual fracasaron ostensiblemente en el cumplimiento de los objetivos que se propusieron y tampoco tuvieron éxito en imponer sus candidatos a la sucesión. Tampoco parece que el actual gobierno militar** vaya a constituir una excepción a esta regla, e incluso el descalabro de 1981 y 1982 sugiere una repetición, en escala mayor, del apresurado repliegue que las Fuerzas Armadas protagonizaran diez años atrás. La superficie de la política argentina, al reiterarse los ciclos de ascenso, crisis y desintegración tanto de los gobiernos constitucionales como de los militares, ha ido adquiriendo una textura de uniformidad en la que, aparentemente, casi el único atributo que distinguió a cada ciclo del anterior fue la mayor intensidad y violencia de las turbulencias políticas. Estas circunstancias han contribuido a generar explicaciones en las que se ha puesto el énfasis en caracterizar a la sociedad argentina como en una situación de equilibrio entre fuerzas sociales de peso relativamente parejo y, como resultado de ello, capaces, a la vez, de bloquear los proyectos políticos de sus antagonistas e incapaces de imponer los suyos propios. Así, las imágenes de bloqueo recíproco y empate social son comunes a un conjunto de interpretaciones, entre las cuales la más profunda y sugerente es la que Guillermo O'Donnell propone en su "Estado y alianzas en la Argentina".¹

* Extraído de *Autoritarismo y democracia*, Buenos Aires, CEAL, 1985.

** El autor se refiere a la dictadura militar de 1976-1983. [N. del E.]

1. Buenos Aires, CEDES, Documento de Trabajo N° 5, 1976. En la novedosa y sugerente propuesta de O'Donnell se filtra una dosis de economicismo. En particular, los mecanismos de formación y confrontación de las alianzas sociales, la ofensiva y la defensiva, descuidan en parte los aspectos políticos. En la sección donde discuto la naturaleza de las tres corrientes que en materia de política económica se perfilaron dentro del antiperonismo posterior a 1955, esbozo un enfoque alternativo que aspira a no subsumir lo político en lo económico.

Este trabajo se ubica en un nivel de análisis diferente. En él se parte de la premisa de que las orientaciones, intereses y valores de las fuerzas sociales no se manifiestan en un vacío, sino en un campo específico, que es un sistema político históricamente definido. Cada sistema político tiene leyes propias, que no constituyen un simple resultado de la interrelación de los atributos de las distintas fuerzas que actúan en él. El descifre de esta legalidad requiere, por ende, una aproximación que reconozca esta eficacia propia del sistema político y que se proponga develarla no reduciéndola a la condición de mero reflejo de los "factores estructurales" ni considerándolo un campo inerte.

El análisis de la convulsiva conformación de nuevas maneras de hacer política a partir de 1955 exige reconocer la complejidad de un proceso que incluyó, pero que no se redujo, a una serie de ciclos de desarticulación y recomposición de alianzas sociales que generaron una sucesión de equilibrios precarios alternativamente rotos y reestablecidos. Sobre todo, porque las imágenes de equilibrio y empate pueden llegar a sugerir la ausencia de cambios, y, desde la perspectiva de la *longue durée*,* una situación de inmovilidad en la que reiterativamente se retorna al punto inicial.

Lo que sí caracterizó a la sociedad argentina con posterioridad a 1955 fue una situación de equilibrio dinámico en la que deben distinguirse dos etapas. La primera, de 1955 a 1966, correspondió al establecimiento de una fórmula política dual, que contribuyó a generar un equilibrio político en el que, si existió un empate, éste se materializó no tanto como resultado de que la alternancia civil-militar representara alternativas antagónicas, sino más bien porque cada gobierno fue en sí mismo un compromiso. En otras palabras, cada gobierno del período se caracterizó por el hecho de que su perdurabilidad estuvo en jaque desde el momento mismo de su inauguración dado que, en la práctica, implementó mecanismos que fueron, sobre todo, límites a las capacidades de acción de los distintos contendientes sociales; es decir, el empate fue interno a cada gobierno en la medida que estuvo condicionado por presiones externas y limitado por su heterogeneidad interna. La segunda etapa, de 1966 en adelante, fue dominada, en cambio, por los sucesivos intentos de unificar el campo de la política —campo que, precisamente, se había escindido durante la década anterior. El fracaso de estos intentos también generó un cierto equilibrio, pero más bien de carácter conmocional o catastrófico ya que el empate se produjo a raíz del aborto de los sucesivos intentos para desempatar; el despliegue y el posterior bloqueo de las sucesivas iniciativas trajeron como consecuencia un desgarramiento del tejido social, es decir, la alteración, erosión e incluso el colapso de patrones básicos de organización e interacción social.

Las dos secciones del trabajo exploran las características de cada una de las etapas. En la primera predominaron gobiernos "débiles", tanto civiles como militares, que intentaron fundar un régimen semidemocrático —imponiendo, en algunos casos, y no cuestionando, en otros, la proscripción del peronismo. El despliegue de los sucesivos proyectos de establecimiento de una semidemocracia

* El autor se refiere al concepto de larga duración en los procesos históricos, de Fernand Braudel. [N. de los comps.]

tuvo un par de consecuencias que quiero destacar. En principio, proveyó el marco para la definición de un estilo de funcionamiento de la sociedad, en la cual los procesos más profundos, económicos, culturales y corporativo-institucionales fueron bastante autónomos de las iniciativas de transformación "desde arriba": las tendencias sociales dominantes, más bien, fueron la resultante de la interrelación de impulsos, resistencias y forcejeos de los distintos actores de la sociedad civil. Los distintos actores sociales, en consecuencia, fueron perfeccionando en cada nuevo ciclo su capacidad para hacer naufragar las irrupciones desde arriba. Todo ello, finalmente, contribuyó a la constitución de un sistema político dual. En este sistema funcionaron, por un lado, los partidos no peronistas y el Parlamento. Ni los unos ni el otro, sin embargo, canalizaron los intereses y las orientaciones de los actores sociales fundamentales. Por el otro lado, operó un sistema de negociaciones y presiones extraparlamentarias y extrapartidarias; en él se llegó a acuerdos y se celebraron compromisos pero, para llamarlo de algún modo, por descarte. Es decir, los distintos actores generalmente se avinieron a aceptar recortes de sus demandas y pretensiones originales. Sin embargo, dichos actores dejaron traslucir que sus preferencias eran otras, que su apoyo a los acuerdos sobre normas y sustancia era un apoyo a regañadientes y de carácter precario y que no vacilarían, de serles posible, en romper estos acuerdos —aun a costa de provocar la ruptura del sistema institucional. Consecuentemente, la esencia del sistema político dual residió no sólo en que el parlamentarismo y el sistema de partidos generaron su polo contradictorio —al proscribir al peronismo y condenarlo a actuar "por fuera"— sino que, asimismo, los participantes de las negociaciones y presiones extraparlamentarias necesitaron del Parlamento y de los partidos como arma de chantaje, es decir, para utilizar precisamente como un recurso *ultima ratio* la desestabilización o caída del gobierno, civil o militar, de turno.

En la segunda etapa predominaron gobiernos "fuertes", o al menos gobiernos que se inauguraron y/o autodefinieron como tales, que se propusieron transformaciones radicales de la política, e incluso de la sociedad, argentinas y que, al momento de su instalación (a diferencia de los gobiernos del período anterior) se basaron en consensos de terminación —de los gobiernos que los precedieron— bastante extendidos. Invariablemente, estos gobiernos fuertes terminaron catastróficamente; ésta no fue una circunstancia uniformemente negativa, pues esos fracasos expresaron, casi sin excepciones, la capacidad de la sociedad argentina para bloquear proyectos autoritarios y represivos.² Pero a diferencia del período anterior, los "éxitos" en impedir la consolidación de los sistemas autoritarios tuvieron costos que fueron mucho más allá de los sobresaltos provocados por la inestable dualidad política del período 1955-1966.

¿Por qué se pagaron precios políticos y sociales mucho más elevados después de 1966? Las razones fueron dos. En primer lugar, como ya se sugería antes, los reformadores y "revolucionarios" posteriores a 1966 fueron mucho más radicales que quienes los precedieron en la ocupación de la cúpula del Estado. Este

2. La excepción parcial es, por supuesto, la del gobierno peronista de 1973. En él coexistieron intentos de estabilización democrática y proyectos de profundización autoritaria.

radicalismo se exacerbó a partir de 1976 cuando se diagnosticó que el problema argentino trascendía la circunstancia de un sistema político al que, de todas maneras, se calificó de inadecuado, y que en realidad se trataba, sobre todo, de sanear una sociedad enferma. Pero ya desde 1966 predominaron enfoques "quirúrgicos" en los que, si bien las enfermedades que se detectaron fueron de signo diferente —la crisis de autoridad (en la sociedad y no simplemente en el Estado), el desorden laboral, la indisciplina de las clases— se coincidió, de todos modos, en que para "curar" a esa sociedad enferma había que calar en ella muy profundamente. La sociedad argentina fue sometida, entonces, a tratamientos brutales en los cuales la generalización y extensión de la represión estatal las más de las veces ejercida en transgresión de las propias normas legales fue sólo uno de los "remedios" aplicados. A ella se sumaron el drástico enrarecimiento que experimentó la vida cotidiana en los diversos ámbitos de la sociedad civil —en gran medida debido al miedo que impregnó las relaciones interpersonales—, la destrucción de vastos segmentos de la estructura productiva y el desmantelamiento de una serie de fundamentales circuitos culturales, profesionales, técnicos y académicos. Debe señalarse, sin embargo, que la imagen de la necesidad del "tratamiento *shock*" como única receta viable para superar los problemas argentinos no fue simplemente el producto de una imaginación política febril y bárbara. Fue también realimentada eficazmente por una sociedad que, crecientemente, se concibió a sí misma como incapaz de generar autónomamente soluciones consensuales a través del juego de intereses y orientaciones contrapuestos. Esta renuncia colectiva de la sociedad civil argentina estuvo a menudo vinculada a ilusiones casi mágicas en el sentido de que las soluciones a los problemas se lograrían simplemente mediante el despliegue de la voluntad política de algún actor o actores providenciales. Desde 1966 los protagonistas cambiaron —los militares, los guerrilleros, los tecnócratas liberales, Perón e incluso los impulsores de la trasnochada aventura bélica de 1982 fueron elevados temporariamente a esa posición por distintos sectores de la sociedad argentina—, sumando fantasías políticas que ignoraron el conflicto o pretendieron resolverlo voluntarísticamente, minimizando la capacidad de otros actores sociales (generalmente de los adversarios de los portadores de la fantasía de turno) para resistir y bloquear dichas fantasías.

La segunda razón de la tragedia de la última década y media tuvo que ver con la índole de las conclusiones que los actores políticos dominantes extrajeron de sus correctos diagnósticos de la dualidad que había caracterizado a la política argentina hasta 1966. En efecto, las fórmulas políticas intentadas a partir de ese año se propusieron superar esta dualidad pretendiendo fusionar la escena política y canalizar hacia el interior del marco institucional los procesos de negociación y conflicto que en el periodo anterior se habían desarrollado extrainstitucionalmente. El efecto de dichos intentos no fue el deseado: en el caso de los gobiernos militares no se logró embretar por mucho tiempo la política dentro de esquemas corporativos o propios de una sociedad de súbditos paralizados y atomizados; tampoco el gobierno peronista logró que el Parlamento y el Pacto Social canalizaran, más o menos ordenadamente, las presiones y los intereses sociales. Sin embargo, el despliegue de los proyectos de 1966, 1973

y 1976 tuvo como consecuencia que, en buena medida, se cerraran los espacios y se obturaran los intersticios por los cuales la política se había colado hasta 1966 sin que se produjeran grandes estallidos. Por ende, se tornó a seguir haciendo política extrainstitucionalmente, pero de manera cada vez más salvaje, con el resultado de que los distintos actores fueron aceleradamente dejando de lado los límites que se habían autoimpuesto en sus interacciones sociales, adoptando estrategias en las cuales la consideración por las consecuencias destructivas de sus comportamientos individuales (en relación a "los otros" y al conjunto de la colectividad) fue reduciéndose progresivamente en cada nuevo ciclo.

Examinemos, entonces, las características de las dos etapas apuntadas.

EL FRACASO DE LA "SEMIDEMOCRACIA" Y SUS LEGADOS

En 1955 una insurrección cívico-militar puso fin al gobierno peronista. La insurrección no sólo produjo el derrocamiento de Perón: asimismo tuvo éxito en desmantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores. El modelo peronista, basado en la relación directa entre líder y masas, había hecho de Perón el depositario único de la representación del pueblo. Este fenómeno tuvo como efecto que los canales parlamentarios y partidarios fueran permanentemente relegados y perdieran relevancia en la escena política. Además, el peronismo en el poder tendió a considerar las actividades de los partidos de oposición (y de las organizaciones profesionales y sindicales no peronistas) como manifestaciones de intereses sectoriales ilegítimos. Consecuentemente el gobierno obstaculizó en forma creciente tales actividades, tanto dentro como fuera del Parlamento.

Los líderes el golpe de Estado de 1955 caracterizaron el régimen peronista como una dictadura totalitaria y, en consecuencia, levantaron los estándares de la democracia y la libertad, proponiéndose como objetivo el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. Este objetivo, sin embargo, se frustró recurrentemente: en 1957, la asamblea constituyente, controlada por los partidos no peronistas, no pudo acordar una nueva constitución y se disolvió sin lograr una reforma del anticuado texto del siglo pasado; en 1962, los militares —con el apoyo de varios partidos— derrocaron al presidente Frondizi, elegido constitucionalmente cuatro años antes; en 1966, los militares volvieron a intervenir para derrocar otro gobierno constitucional, esta vez el del presidente Illia.

Tanto en 1955-1958 como en 1962-1963, los interregnos entre gobiernos constitucionales fueron ocupados por administraciones militares. Las mismas, sin embargo, no se propusieron reemplazar la democracia parlamentaria por un régimen político alternativo ni posponerla para un futuro distante, al que se arribaría sólo *después* de que ciertos cambios económicos o sociales fueran logrados. Más bien, el principal y autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de mecanismos proscriptivos del peronismo,

mientras, al mismo tiempo, intentaban erradicarlo. El peronismo era percibido como un fenómeno inherente e irremediamente adverso a las instituciones y valores democráticos, a los cuales, de haberle sido permitido actuar libremente, hubiera deformado e incluso destruido.

El despliegue de una nueva fórmula política, después de 1955, fue en verdad un proceso convulsivo y frustrante. Pero los fracasos en la tarea de lograr estabilidad institucional no impidieron que durante esos años se configuraran nuevos modos de hacer política que implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y relaciones socio-económicas. Estos nuevos modos de articulación política se desplegaron gradualmente durante la década siguiente a la caída de Perón; si bien no dieron lugar al surgimiento de una fórmula institucional que produjera estabilidad política, su relevancia trascendió al periodo 1955-1966. En efecto, los nuevos modos dejaron un legado político-ideológico con el cual tuvieron que lidiar necesariamente los diferentes actores políticos, viejos y nuevos, cada vez que se esbozaron fórmulas políticas alternativas a partir de 1966.

Los puntos de esta sección analizan la forma en que se fueron definiendo estos modos de hacer política. Para ello se exploran tres de sus elementos más importantes: a) el surgimiento de desfases significativos entre el nivel de los intereses socio-económicos, por un lado, y el de los bloques políticos, por el otro; b) la formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que se constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición; c) el ingreso de los militares a la arena política, asumiendo, primero un rol tutelar en el marco de regímenes semidemocráticos, y expandiendo, más tarde, su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias.

Argentina post 1955: una comunidad política desarticulada

El derrocamiento del gobierno peronista en 1955 fue promovido por un amplio frente político que incluyó todos los partidos no peronistas, los representantes corporativos e ideológicos de las clases medias y las burguesías urbana y rural, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Los miembros del frente antiperonista persiguieron objetivos dispares. Sin embargo, el frente pudo mantenerse unido durante un cierto tiempo bajo la bandera de la "democracia", que fue levantada oponiéndola al carácter dictatorial y totalitario atribuido al régimen peronista.

Muchos antiperonistas compartieron la noción, un tanto ingenua, de que los peronistas habían sido convertidos a ese credo político mediante una combinación de demagogia, engaño y coerción. En consecuencia, creyeron que la mera denuncia de los "crímenes de la dictadura", acompañada de un proceso de reeducación colectiva, resultaría en una gradual reabsorción de ex peronistas por partidos y sindicatos "democráticos". Esta ilusión no duró mucho; el peronismo sobrevivió a la caída de su gobierno y se constituyó en el eje de un vigoroso movimiento opositor. Sin embargo en el corto plazo esta ilusión tuvo el efecto de permitir a los antiperonistas proclamar que la proscripción del

peronismo —una medida que implicaba segregar políticamente entre un tercio y la mitad de la ciudadanía argentina— era en realidad una acción democrática. Naturalmente, una consecuencia adicional de la proscripción del peronismo fue su exclusión del gobierno.

El corolario de la exclusión del peronismo, tanto del plano electoral como del correspondiente a la acción política legal, fue particularmente complejo. En primer lugar, introdujo una profunda disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la política en la Argentina, que resultó en la emergencia paulatina de un sistema político dual. En él, los mecanismos parlamentarios coexistieron, de manera conflictiva y a veces antagónica, con modalidades extrainstitucionales de hacer política. El principal resultado de este dualismo fue que los dos "bloques" principales de la sociedad —es decir, el sector popular y el frente antiperonista, compuesto por los sectores burgueses y de clase media— rara vez compartieron la misma arena política para la resolución de conflictos y el logro de acuerdos basados en mutuas concesiones. El sector popular —y especialmente la clase obrera, que se había expresado principalmente a través del peronismo— quedó privado de toda representación tanto en las instituciones parlamentarias semidemocráticas como en la maquinaria institucional del Estado. En contraste, sus adversarios sociales —quienes, por otra parte, habían sufrido una exclusión política parcial durante la época peronista— tuvieron la posibilidad de recurrir tanto a los mecanismos parlamentarios como a los extrainstitucionales. Gozaron de un acceso privilegiado al Estado y ejercieron una influencia decisiva sobre las políticas y los impactos de las acciones estatales.

Las presiones ejercidas por el sector popular fueron, en su gran mayoría, de carácter extrainstitucional. El movimiento sindical peronista se transformó progresivamente en la expresión organizada más poderosa del aquel sector. En última instancia, sin embargo, la presión popular se redujo a la capacidad de desestabilizar, desde afuera del escenario político oficial, a cada uno de los regímenes civiles y militares que se sucedieron durante el periodo. Tal desestabilización se logró tanto a través del planteo de demandas económicas que contradijeron y socavaron la viabilidad de las políticas de estabilización lanzadas entre 1956 y 1963 como mediante el apoyo a candidatos antioficialistas en elecciones nacionales, provinciales y locales.

A la limitada correspondencia que existió entre, por un lado, los conflictos y los alineamientos sociales y, por el otro, las modalidades institucionales de hacer política, fenómeno al que hemos caracterizado como de "disyunción", se agregó un segundo factor que la acentuó. Éste podría ser considerado como una "disyunción dentro de la disyunción" y afectó al antiperonismo. Originalmente, el bloque social que enfrentó a los sectores populares se expresó plenamente a través del frente formado por los partidos no peronistas y los militares "democráticos" triunfantes en 1955. Poco a poco, sin embargo, esta situación se fue alterando y partidos no peronistas y militares comenzaron a expresar contenidos disímiles, y a veces antagónicos. Esto se debió a dos razones. La primera fue que los militares "democráticos" de 1955 fueron perdiendo progresivamente su "vocación democrática", para concluir respaldando el establecimiento de régi-

menes de carácter autoritario. Este “deslizamiento” autoritario de los militares los llevó a enfrentarse crecientemente con los partidos, pues a pesar de que éstos por lo general no renegaron de su antiperonismo, su razón de ser estaba obviamente ligada al funcionamiento de un sistema democrático-parlamentario y al mantenimiento de un mínimo de libertades públicas. La segunda causa que complicó las relaciones entre militares y políticos fue que los partidos no peronistas se transformaron en el principal canal de expresión de una compleja interacción entre dos controversias que dominaron la escena política argentina luego de la caída de Perón. En 1955 el frente antiperonista se había coaligado en torno al estandarte “oposicionista”, es decir, el proyecto de destrucción del régimen peronista. Esta unidad, sin embargo, comenzó a desvanecerse cuando llegó el momento de ejercer el poder desde el Estado y hallar vías de resolución a las aludidas controversias.

La primera de estas controversias se definió en torno al rol de gobierno con respecto a la erradicación del peronismo. Las diferentes posiciones en ese sentido comprendieron un espectro que iba desde el “integracionismo” —el cual postulaba una gradual reabsorción del peronismo a la vida política, aunque sin desconocer la necesidad de una purga de sus aspectos más “dañinos”, como el mismo Perón— hasta el “gorilismo”, con su nunca abandonado propósito de “extirpar completamente el cáncer peronista” de la sociedad argentina. La segunda controversia estuvo vinculada al modelo socio-económico que, presumiblemente, reemplazaría al que había prevalecido durante el periodo 1945-1955. En 1955 el victorioso frente antiperonista se unificó en torno a la denuncia de los problemas económicos que la Argentina había enfrentado desde fines de la década de 1950; inicialmente, resultó relativamente fácil para los distintos integrantes del frente coincidir en la condena de un conjunto de políticas poco efectivas y de una administración corrupta, como principales fuentes de las dificultades que enfrentaba el país. Sin embargo, esta transitoria unidad pronto se hizo trizas al aflorar diagnósticos opuestos de la crisis económica argentina. El perfilamiento de estos diagnósticos se tradujo en la formulación de recomendaciones alternativas acerca del curso a seguir en materia de política económica.

A partir de 1956 fueron emergiendo gradualmente tres posiciones divergentes en el campo del antiperonismo: la del populismo reformista, la desarrollista y la liberal. La primera no cuestionó las premisas básicas del modelo impulsado durante la década peronista.³ Por el contrario, alentó la posibilidad —y conveniencia— de promover simultáneamente los intereses de la clase obrera y la burguesía urbana, y propuso una política nacionalista moderada, que impidie-

3. Como he sugerido en otro trabajo, “la ecuación socioeconómica del peronismo no fue demasiado compleja. Por una parte, se impuso un techo a las ganancias de la clase terrateniente de la pampa húmeda, principalmente a través de las tasas cambiarias múltiples. Por otra parte, se promovió un aumento simultáneo de los salarios reales y de las ganancias del sector industrial, incluyendo a los segmentos intensivos en mano de obra y que utilizaban técnicas más eficientes. Este aumento de las ganancias del sector industrial se basó principalmente en la expansión del consumo de los bienes salario”. Cf. Marcelo Cavarozzi, “El sindicalismo argentino entre 1955 y 1982”, en Ignacio Marván, Madrid, Alianza, 1982.

ra, o al menos limitara, la presencia del capital extranjero en sectores tales como energía, comunicaciones y producción de bienes de capital. Esta posición combinaba elementos reformistas y populistas y, en realidad, sólo formuló dos críticas importantes a las políticas económicas del gobierno peronista. Por una parte, el *populismo reformista* sostuvo que las políticas de Perón habían desalentado la producción agropecuaria, acusación que quedaba corroborada por el estancamiento de la producción en esa área a lo largo del gobierno peronista. Por otra parte, esta posición argumentó que se había fracasado en la promoción de la industria pesada y el desarrollo de la infraestructura económica, y que el Estado había expandido desproporcionadamente sus gastos corrientes, retrasando la inversión en obras públicas.⁴

Las consignas del populismo reformista fueron promovidas por el radicalismo, que se había transformado en la única oposición partidaria organizada después de 1946.⁵ En 1956 el partido se dividió; un ala, la Radical Intransigente o frondicista, era partidaria de una gradual legalización del peronismo; la otra, la de los Radicales del Pueblo, permaneció cercana a la posición proscriptiva, más dura, de los militares. En todo caso, las facciones mayoritarias de los dos nuevos partidos mantuvieron su adhesión al programa de Avellaneda, que proponía en lo económico una serie de medidas de carácter nacionalista y reformista.

Sin embargo, cuando el líder de los intransigentes Arturo Frondizi fue elegido presidente en 1958, redefinió radicalmente la orientación económica del partido, articulando una posición enteramente distinta, la “desarrollista”, y fue la otra fracción, es decir, la de los radicales del pueblo, la que mantuvo su apoyo a los postulados del populismo reformista.

Los desarrollistas, en cambio, sostuvieron que el estancamiento económico de la Argentina se debía principalmente a un retardo en el crecimiento de las industrias de base. Tal debilidad, según esta postura, sólo podía superarse mediante un proceso de “profundización” que abarcara la expansión de los sectores productores de bienes de capital e intermedios y de la infraestructura económica. Asimismo, la posición desarrollista postuló que el modelo de conciliación de clases del periodo 1945-1955 tenía, al menos en el corto plazo, una contradicción ineludible. Ésta sólo podía ser resuelta disminuyendo el salario real de los trabajadores para aumentar la renta de los industriales; tal aumento era, a su vez, considerado un requisito indispensable para una

4. En realidad el reformismo populista no peronista llevó el esquema de reconciliación de clases aun más lejos que el mismo peronismo. La clase terrateniente pampeana había sido expropiada de una importante porción de sus ganancias para que la redistribución del ingreso y la sustitución de importaciones, que tuvieron lugar entre 1945 y 1955, fueran posibles. Por lo tanto, era poco claro cómo se haría para restaurar los incentivos económicos a los terratenientes sin afectar los intereses de las clases urbanas, ya fueran la burguesía, el proletariado o ambos.

5. El partido radical había alcanzado el poder en 1916, después de haber luchado por la implantación del sufragio masculino universal. Luego del derrocamiento de su líder Hipólito Yrigoyen, los radicales fueron proscriptos de las elecciones presidenciales hasta mediados de los años 40. A partir de entonces, el partido radical adoptó una plataforma económica relativamente progresista, mientras, al mismo tiempo, atrajo a la oposición antiperonista, de carácter más bien conservador.

elevación significativa del nivel de inversión. Finalmente, los desarrollistas abogaron por un cambio sustancial en las políticas relacionadas con el capital extranjero, aplicadas en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollismo sostuvo que, dado que los recursos locales de capital eran insuficientes para lograr la deseada "profundización", se requería una incorporación masiva de capital extranjero a la economía. El desarrollismo recién se terminó de articular en 1958, cuando Frondizi cambió de curso y tiró por la borda el programa "nacional y popular" que había contribuido significativamente a generar los apoyos sociales que le permitieron alcanzar la victoria en las elecciones de ese año.⁶

Como hemos visto, el desarrollismo no prestó un apoyo irrestricto al modelo de conciliación de clases, sino que propugnó la introducción de significativos ajustes al mismo. Tales modificaciones tuvieron por objeto inducir un cambio en la correlación de fuerzas en favor de la burguesía urbana. A pesar de ello, el programa desarrollista no cuestionó los aspectos centrales del proceso de industrialización sustitutiva inaugurado en los años 30. Por el contrario, los políticos desarrollistas impulsaron tanto la aceleración como la ampliación cualitativa del proceso de industrialización.

Comparativamente, la última de las posiciones, la *liberal*, fue mucho más lejos en la crítica del proceso de industrialización iniciado en la década del 30 y de las prácticas sociales y políticas asociadas a él. Los liberales no sólo criticaron el modelo de conciliación de clases; cuestionaron también la premisa según la cual el desarrollo industrial debía constituir el núcleo dinámico de una economía cerrada. Argumentaron en este sentido que desde los años 30 —y particularmente desde 1946— la Argentina se había enfrentado con dos problemas críticos: el progresivo deterioro de la disciplina de los trabajadores y la ineficiencia de amplias franjas de la burguesía industrial. Tales problemas tenían su raíz, desde la perspectiva liberal, en las políticas que habían cerrado la economía, favoreciendo la proliferación de industrias "artificiales", y en el excesivo crecimiento del Estado. La imagen del mercado pasó a constituir, en un doble sentido, la piedra fundamental de la posición liberal. Por una parte, implicaba la apertura de la economía argentina y su reintegración al mercado internacional, mediante la reducción de los aranceles y la eliminación de otras "distorsiones" que protegían a los sectores artificiales. Por otra parte, suponía una drástica reducción de la intervención del Estado en la economía y la restauración, mediante adecuados incentivos, de la iniciativa del sector privado.

Como fuera ya señalado, cada una de estas tres posiciones abogaba por políticas económicas disímiles y, con frecuencia, antagónicas. Obviamente, tales políticas tenían la capacidad potencial de afectar de manera diferente los intereses de las principales clases de la sociedad argentina. Sin embargo, la política de ese período se caracterizó por una circunstancia muy poco común: los clivajes y alineamientos políticos no respondieron solamente a los cálculos que se hicieron del impacto que las políticas económicas producirían en cada

6. A partir de fines de la década de 1950, miembros de las Fuerzas Armadas también comenzaron a prestar apoyo a la postura desarrollista.

clase social. Existió, además, otro factor que estuvo vinculado sólo en forma indirecta, cuando no contradictoria, a las respectivas evaluaciones de los intereses económicos particulares; ese factor no fue otro que la cuestión del peronismo. La presencia del proscripto movimiento peronista se expresó de un modo muy especial en la escena política. Esta presencia, si bien implícita, fue uno de los factores determinantes de los modos en que las organizaciones políticas y sociales que encarnaron las tres posiciones descritas antes definieron y resolvieron los conflictos surgidos durante este período.

A partir de 1955, los partidos políticos, organizaciones corporativas y corrientes ideológicas, a través de los cuales se expresaron el reformismo populista, el desarrollismo y el liberalismo, entraron en numerosas alianzas y conflictos. Como se adelantaba antes, tanto los apoyos que tales partidos y organizaciones recibieron como las oposiciones que suscitaban tuvieron que ver con dos factores: 1) las predicciones de las consecuencias que previsiblemente tendría la implementación de las políticas económicas alternativas en relación con los intereses económicos de cada clase o sector social, y 2) el modo en que la retórica, las plataformas y la ideología de cada partido o corriente aludió a la cuestión del peronismo. Tales alusiones, a su vez, hacían referencia a las dos principales manifestaciones político-institucionales de la identidad peronista de los sectores populares, la exclusión política que sufrían como ciudadanos y su renovada adhesión a un movimiento sindical que continuó definiéndose como parte del peronismo y no meramente como una red de organizaciones corporativas de la clase obrera.⁷

La complejidad de la política argentina del período 1955-1966 se debió en gran medida a que las adhesiones y oposiciones políticas generadas, por una parte, por las predicciones acerca de los efectos que tendría la aplicación de las políticas económicas alternativas sobre lo que cada grupo percibía como "sus

7. Como resultado de medidas y/o presiones impuestas por los militares, el peronismo estuvo proscripto desde 1955 en adelante. Esto sometió a los partidos políticos a una doble presión. Hacia fines de la década de 1920, el sistema político argentino había alcanzado niveles de participación electoral comparables a los de los países capitalistas más avanzados. Además, durante el régimen peronista, la clase trabajadora había alcanzado la ciudadanía plena, y el gobierno había extendido a las mujeres el derecho a votar. Por lo tanto, la realidad política argentina de mediados de la década de 1950 condenó como inviables los intentos de los "demócratas" que pretendían establecer la "democracia" únicamente para los "demócratas", excluyendo de hecho a una porción de la ciudadanía que constituía entre un 30 y un 50% de la misma. Aun los partidos que continuaron articulando una ideología antiperonista, como los radicales del pueblo y varios grupos conservadores más reducidos, comenzaron a cuestionar las regulaciones proscriptivas que minaban los fundamentos de la postura democrática, según la cual el respeto de la soberanía popular constituía la principal base de legitimación del sistema. Más aún, otras corrientes políticas, como los radicales intransigentes y pequeñas fracciones de los partidos conservador, socialista y demócrata cristiano, explicitamente buscaron atraer los votos peronistas, a cambio de promesas referidas a la implementación de determinadas políticas sustantivas y al levantamiento de la proscripción del peronismo en las "próximas" elecciones. En la esfera de la legislación laboral y de las políticas gubernamentales con respecto al movimiento sindical, la oposición de los partidos no peronistas a los lemas de los líderes sindicales del peronismo se fue debilitando gradualmente. En particular, los partidos relajaron sus posiciones contrarias a las demandas peronistas referidas tanto al restablecimiento de una "única CGT y un solo sindicato por rama de actividad", como al sistema de negociación colectiva de salarios, con la participación del Estado. En definitiva, el consenso inicial logrado en torno a la proscripción y exclusión del peronismo se disolvió gradualmente.

intereses" y, por otra parte, las reacciones de los distintos grupos con respecto a las estrategias alternativas de exclusión e reincorporación del peronismo a la escena política legal, estaban relacionadas pero no fueron totalmente coextensivas. La lógica de esta compleja interrelación fue gobernada principalmente por las oscilaciones pendulares de aquellos partidos, organizaciones empresariales y sectores militares que expresaron y articularon la posición liberal.

¿A qué se debieron y de qué modo ocurrieron las oscilaciones pendulares de los liberales? Dichas oscilaciones en parte respondieron a una circunstancia relativamente contingente: los programas concretos de los dos partidos que dieron cuerpo a las posiciones del populismo reformista y el desarrollismo —es decir, los radicales del pueblo y los radicales intransigentes— combinaron la política y la economía de una manera contradictoria y, desde la perspectiva de los liberales, totalmente insatisfactoria. Ya desde 1956 sectores significativos del Radicalismo del Pueblo habían defendido políticas económicas reformistas y nacionalistas que poco se diferenciaron de las aplicadas durante la primera etapa del régimen peronista.⁸ Sin embargo, con respecto al peronismo, los radicales del pueblo tendieron a asumir posiciones cercanas al "gorilismo"; más específicamente, apoyaron la proscripción electoral del peronismo hasta principios de la década del 60 y abogaron por el establecimiento de un sistema de afiliación sindical que hubiera tenido como consecuencia la atomización de la organización corporativa de la clase obrera. Esto último, naturalmente, despertó la oposición de la conducción sindical, predominantemente peronista. La fórmula del radicalismo intransigente era, prácticamente, el reverso exacto de la posición de sus viejos correligionarios. Luego de la asunción de Frondizi como presidente, en 1958, los radicales intransigentes adoptaron un programa económico orientado a la expansión de las industrias productoras de bienes de consumo durable y de capital y a la modernización y privatización creciente de los sectores de energía, transporte y comunicaciones. Este programa reservó un papel estratégico al capital extranjero e impuso inicialmente una drástica reducción del salario real. Los radicales intransigentes, sin embargo, nunca abandonaron los objetivos "integracionistas" que anunciaron desde 1956. Trataron de reforzar el predominio peronista en el movimiento sindical, pero, al mismo tiempo, indujeron (e incluso forzaron) a los líderes sindicales a actuar "responsablemente", lo cual significaba: a) contener las "excesivas" demandas salariales de las bases y b) distanciarse del liderazgo ejercido por Perón.

Excluido el peronismo, los dos partidos radicales agotaban el espectro de fuerzas electoralmente significativas de fines de la década del 50 y principios de la del 60. La posición liberal carecía de la posibilidad de expresarse a través de un partido conservador fuerte, con posibilidades reales de ganar una elección presidencial o, siquiera, de obtener una representación parlamentaria significativa.⁹ La coherencia interna de los programas liberales se equiparaba a su

8. Actuando desde el interior del régimen militar, los radicales del pueblo respaldaron en 1956 los programas redistribucionistas del ministro de Economía Eugenio Blanco, y en 1957 bloquearon parcialmente la implementación del plan de estabilización relativamente ortodoxo, impulsado por el sucesor de Blanco, Roberto Verrier.

9. Como ha sido discutido en otro lugar por el autor —y señalado por diversos estudiosos del tema—,

tremenda debilidad electoral. La síntesis programática liberal, es decir, la propuesta de 1) erradicar definitivamente al peronismo y pulverizar el sindicalismo peronista, 2) producir una drástica reducción del intervencionismo estatal, y 3) eliminar los sectores industriales ineficientes, obtuvo la adhesión de amplios sectores de la burguesía argentina. Empero, no sirvió para ganar votos. En consecuencia, luego de 1955, los liberales debieron enfrentar la dura realidad de que la derrota de su principal enemigo, el peronismo, no se tradujo en la resolución de sus problemas políticos. Así se vieron continuamente forzados a elegir entre lo que en última instancia percibieron como dos "males menores": el desarrollismo y el reformismo populista. Sin embargo, la lógica de este juego político llevó a los liberales a modificar repetidamente su evaluación de cuál de esos "males" era realmente el "menor".

Cuando eligieron dar prioridad a sus objetivos económicos, como entre 1959 y 1961, tendieron a aliarse con el desarrollismo. Pero esa alianza no fue fácil ni pudo alcanzar un grado satisfactorio de estabilidad. Si bien liberales y desarrollistas coincidieron en la necesidad de aplicar programas de estabilización basados en fuertes devaluaciones y congelamientos de salarios, no alcanzaron el mismo grado de acuerdo con respecto a la estrategia económica de largo plazo. Por lo tanto, el éxito mismo del programa de estabilización, sobre el que habían coincidido previamente, agudizó y puso más de manifiesto sus conflictos más profundos.¹⁰ Además, y debido a que los desarrollistas nunca abandonaron su postura "integracionista", los liberales frecuentemente se sintieron ofendidos y perjudicados por las actitudes conciliatorias que tuvo el desarrollismo hacia los líderes sindicales peronistas. Las negativas del gobierno frondicista a dismantelar la CGT y las idas y vueltas con respecto a la proscripción del peronismo en los comicios legislativos y provinciales agudizaron la tensión entre los liberales desarrollistas. En consecuencia, aquellos se inclinaron a menudo por resaltar sus orientaciones antiperonistas —como ocurrió en 1956-1958 y, menos claramente, en 1962-1963—, lo cual los llevó a unirse al populismo reformista. Pero, naturalmente, ésta también era una alternativa poco satisfactoria. Tanto en 1958 como en 1962 los radicales del pueblo ofrecieron una plataforma antiperonista y antiintegracionista aparentemente atractiva, pero que constituía la antípoda del liberalismo en términos de política económica. Cada vez que el populismo reformista tuvo oportunidad de aplicar su programa económico —como ocurrió parcialmente en 1956 y de un modo más claro entre 1963 y 1966— los liberales se sintieron profundamente

los partidos conservadores de la Argentina nunca se recompusieron luego del colapso del régimen oligárquico en 1916. Esto constituyó prácticamente un caso único en el contexto del Cono Sur latinoamericano; en otros lugares, como Brasil, Chile y Uruguay, el conservadurismo político siguió constituyendo una fuerza electoral significativa. (Cf. Marcelo Cavarozzi, "Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico", en *Revista Mexicana de Sociología*, 78, 1978, p. 4.)

10. En 1959, Frondizi —amenazado por repetidos "planteos" militares— designó a Alsogaray, un liberal, como ministro de Economía. En 1961, lo desplazó de su cargo, cuando el plan de estabilización había logrado ya algunos de sus objetivos —fundamentalmente, la reducción de la inflación y del déficit de la balanza de pagos.

contrariados por políticas que no dejaban de asemejarse a las del peronismo.¹¹

En consecuencia, uno de los rasgos sobresalientes de la disyunción que recorrió al antiperonismo a lo largo de este período fue que cada uno de los resultados sucesivos estuvo determinado por el sentido en que, alternativamente, oscilaron los liberales. Al mismo tiempo, sin embargo, los liberales ejercieron sólo una influencia mínima en el curso seguido por la política y la economía. Si bien inicialmente estuvieron en condiciones de imponer programas de estabilización, fueron más tarde obligados a renunciar a sus objetivos de largo plazo o, aún peor, forzados a abandonar las posiciones conquistadas en el gobierno. De tanto en tanto tuvieron éxito en lograr la proscripción del peronismo, pero fracasaron rotundamente en su objetivo de controlar el régimen semidemocrático que pretendieron fundar.

Los liberales, como cabía esperar, adquirieron una conciencia creciente de la futilidad de sus pendulaciones, en cuanto al logro de sus objetivos de largo plazo, es decir, la erradicación del peronismo (y de su espectro) y la rectificación de la orientación económica estatista y proindustrialista. Hacia mediados de la década de 1960 esta progresiva toma de conciencia fue un factor decisivo que indujo a los liberales a optar por una estrategia abiertamente antidemocrática. Tal estrategia puso énfasis en la necesidad de eliminar aquellas mediaciones políticas, los partidos y los mecanismos parlamentarios que, supuestamente, habían impedido por más de una década la implementación del programa liberal. Entre 1964 y 1966, a diferencia del período frondicista, el énfasis renovado puesto por los liberales en sus objetivos económicos no desembocó en otra alianza con el ala desarrollista del espectro político. A esa altura los liberales ya estaban convencidos de que para alcanzar sus objetivos económicos y políticos debían romper sus vínculos con el *establishment* partidario no peronista.

Los sindicatos peronistas en la oposición

El intento del régimen militar de 1955-1958 de fundar un régimen político basado en los partidos y en el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios fracasó completamente. Sin embargo, el despliegue de tal intento tuvo consecuencias significativas para la sociedad argentina. Más allá de haber causado el colapso del régimen peronista, la intervención militar favoreció, a partir de 1955, el surgimiento de una especie, de una suerte de "parlamentarismo negro". Este estilo de política se fue conformando a raíz de la frustrada implementación de los proyectos pertenecientes a los militares "democráticos" y de la no prevista configuración de nuevos patrones de acción política que fueron prevaleciendo subsecuentemente. Hasta cierto punto, la misma situación se reprodujo en relación con las políticas hacia la clase obrera y las relaciones laborales. El régimen militar fracasó rotundamente en sus intentos de erradicar al peronismo de la clase trabajadora. Asimismo, el régimen no logró imponer su proyecto de crear un sistema de afiliación y de representación sindical múltiple, destinado

11. Para un análisis detallado de las similitudes entre las políticas y plataformas económicas del peronismo y el radicalismo del pueblo, cf. A. Canitrot, "La experiencia populista de redistribución de ingresos", en *Desarrollo Económico*, 15-59, Buenos Aires, 1975.

a reemplazar las pautas establecidas por la ley peronista de los años 40. Sin embargo, a pesar de que no cuajaron, estos intentos produjeron cambios importantes en el interior del movimiento obrero a partir de 1955.

En primer lugar, el estilo de control político de la clase obrera establecido durante la época peronista fue radicalmente modificado. Este estilo se había basado en el tutelaje benévolo de la clase obrera por el Estado y en la subordinación ideológica del movimiento sindical a Perón. Más aún, los líderes sindicales peronistas que habían controlado los sindicatos hasta 1955 se vieron, salvo contadas excepciones, efectivamente desplazados de la escena sindical, y nunca recuperaron su anterior influencia. En segundo lugar, el frustrado proyecto de los militares creó las condiciones para el surgimiento de un movimiento sindical peronista enteramente diferente que ganó cierta independencia frente a Perón y fue capaz de desarrollar su propia estrategia política.

Sin embargo, Perón no desapareció de la escena política argentina ni del peronismo luego de 1955. Su rol, eso sí, sufrió cambios significativos. Para empezar, la naturaleza de su vínculo con las masas populares cambió, ya que Perón dejó de tener la posibilidad de satisfacer sus demandas y de apelar periódicamente a ellas en forma directa. Alternativamente, la figura de Perón emergió como el principal símbolo del retorno. La imagen del retorno a un pasado mejor se constituyó en la base más importante del atractivo que el peronismo despertó permanentemente en las masas, y, en particular, en la clase obrera. Otro cambio importante fue que Perón perdió, en parte, su poder de controlar a los líderes peronistas. Algunos políticos provinciales, sobre todo de zonas ajenas a las áreas metropolitanas de la región pampeana, y numerosos líderes sindicales generaron bases propias de poder, lo cual les dio un espacio para desafiar ocasionalmente la autoridad del "líder". Si bien los desafíos más serios y explícitos a la autoridad de Perón fracasaron invariablemente, el poder para sancionar las expresiones de rebeldía, otrora ejercido sin restricciones por el "líder", se vio reducido sustancialmente.

Los desafíos abiertos a la autoridad de Perón no constituyeron la única manifestación de las transformaciones que su liderazgo sufrió a partir de 1955. Otra circunstancia importante fue que las connotaciones ideológicas del peronismo se fueron librando en parte de su influencia. La siempre ambigua ideología peronista empezó a reflejar en mayor medida la correlación de fuerzas internas del movimiento. Un peronismo menos subordinado a la autoridad de Perón, y reflejando más directamente el peso relativo de las fuerzas sociales que lo constituía, se transformó en un peronismo crecientemente proletario. Esta gradual transformación fue favorecida por un factor adicional: en cada ocasión que la proscripción electoral del peronismo fue levantada —aunque fuera de manera parcial— la esfera de acción de los líderes sindicales se vio considerablemente expandida al tener la oportunidad de incidir en la lucha política en torno a los comicios. El voto de los trabajadores se transformó así en un instrumento de presión y negociación, comparable a los paros y huelgas. Además, a diferencia de Perón y de los políticos peronistas, los líderes sindicales tuvieron siempre la opción de replegarse a una esfera específica de acción: las negociaciones colectivas y las relaciones industriales. En consecuencia, los

líderes sindicales del peronismo desarrollaron una aptitud de la que habían carecido hasta 1955, es decir, la capacidad de negociar con actores políticos no peronistas, tales como los partidos, las asociaciones empresariales y los militares.

El poder del movimiento sindical peronista se amplió después de 1955. Asimismo, este poder se apoyó en bases bastante diferentes. ¿Cómo empleó el sindicalismo su redefinido poder? Antes se sugirió que las acciones de los líderes sindicales fueran gobernadas, a partir de 1955, por una estrategia defensiva y de oposición. Esto estuvo estrechamente ligado al énfasis puesto por el peronismo en la imagen del retorno. Los sindicalistas peronistas de la época posterior a 1955 actuaron en una sociedad que cada vez se pareció menos a la Argentina del periodo 1945-1955. A partir de 1959 la economía fue gradualmente transformada por la expansión de los sectores industriales productores de bienes intermedios y de consumo durable. Dichos sectores eran más intensivos en el uso del capital y estaban más penetrados por el capital extranjero que los sectores industriales desarrollados durante las dos décadas anteriores. Los nuevos sectores pronto desplazaron a estos últimos de su rol de núcleo dinámico del capitalismo argentino. Sin embargo, el discurso de los sindicalistas peronistas reclamó continuamente la restauración de los atributos prevalecientes antes de 1955. Estos atributos eran, en parte, rasgos reales de la Argentina de la década 1945-1955 y, en parte, una destilación de la visión ideológica del peronismo: la alianza entre la burguesía nacional y la clase obrera bajo el tutelaje protector del Estado: políticas económicas redistributivas, nacionalismo, la definición de la oligarquía (agraria) como el principal adversario social de las fuerzas "nacionales y populares" y el poder arbitral de Perón.

El símbolo unificador de la recuperación de la época de oro perdida lo constituía, por supuesto, el retorno de Perón a la Argentina... y al poder. Sin embargo, el retorno de Perón, y de la Argentina peronista, dejó de ser objetivo político fundamental del movimiento sindical peronista. Se transformó, más bien, en una especie de mito que cumplía dos funciones. En primer lugar, permitió a los líderes sindicales interpelar a los obreros como obreros peronistas, y por lo tanto rescatar a una de las raíces de su identidad colectiva, que no llegó a ser borrada por los sucesivos regímenes posperonistas.¹² En segundo lugar, la proclamada adhesión a un objetivo político que, en el contexto de la Argentina de 1955-1966 era considerado inalcanzable por todos los sectores políticos importantes —peronistas incluidos— liberó a los sindicalistas de la responsabilidad de reconocer las consecuencias y corolarios políticos más concretos que tenía su estrategia. Dicho reconocimiento los hubiera forzado a autolimitarse en sus demandas económicas. En este sentido, el sindicalismo peronista no fue, como algunos han argumentado, un movimiento meramente economicista; en él, más bien, los objetivos económicos y políticos se entrelazaron de una manera muy peculiar.

12. En realidad, podría afirmarse que el ingenuo intento de erradicar el peronismo, llevado a cabo por el régimen militar de 1955-1958, provocó una reacción antagónica que tuvo la virtud de reforzar la lealtad de la clase obrera y otros sectores populares con respecto al peronismo. (Cf. M. Cavarozzi, *Sindicatos y política en Argentina, 1955-1958*, Buenos Aires, CEDES, 1979.)

Aunque las demandas impulsadas por los sindicatos peronistas eran de naturaleza económica y corporativa, contuvieron frecuentemente una invocación política. Los sindicalistas argumentaron —a veces de un modo directo, otras de manera oblicua— que las políticas económicas y laborales de los regímenes no peronistas no sólo perjudicaban los intereses inmediatos de los trabajadores sino que además socavaban la posibilidad del retorno a la época dorada del peronismo. Y, aunque la invocación estuvo dirigida a los trabajadores, fue "oída" también por otras clases: la burguesía argentina también hizo la conexión entre el programa económico y corporativo de los sindicatos peronistas, y la posibilidad de resurrección de una era acerca de la cual sus memorias eran enteramente diferentes a las de la clase obrera.

Las prácticas políticas del movimiento sindical combinaron dos elementos: 1) un patrón de esporádicas penetraciones en los mecanismos de representación parlamentaria que se manifestó a través de la limitada, aunque significativa, capacidad de los líderes sindicales para influir sobre la conducta electoral de los trabajadores; y 2) una acción de desgaste a largo plazo —algo así como un continuo e implacable asedio "desde afuera"— que se ejerció contra regímenes políticos que excluyeron al peronismo, al costo de ser altamente vulnerables a ataques cuestionadores de su representatividad y legitimidad.

Las administraciones del periodo 1955-1966, tanto civiles como militares, resultaron debilitadas por los efectos que produjo uno de sus propios axiomas operativos, es decir, la exclusión del peronismo de la escena política legal. En efecto, tal exclusión redundó en que la capacidad política de la clase obrera para obtener concesiones fue mayor toda vez que ésta se propuso quebrantar las reglas formales. En consecuencia, el movimiento sindical peronista se tornó, tal como se quejaban algunos de sus adversarios, una fuerza subversiva. Tal carácter subversivo, sin embargo, no estuvo asociado a un cuestionamiento de la naturaleza capitalista de las relaciones sociales. Reflejó, en cambio, que el sindicalismo —así como otros actores— recurrió, como último recurso, al quebrantamiento de las reglas formales del sistema. En realidad, el efecto desestabilizador de las acciones emprendidas por el sindicalismo fue siempre indirecto, como resultado del impacto que tales acciones produjeron en la conducta de otros actores, y en particular de las Fuerzas Armadas. Los sindicalistas contribuyeron a crear circunstancias que indujeron a los militares a deponer a las administraciones civiles, o frustraron los objetivos de los regímenes militares, induciéndolos de ese modo a abandonar el poder para evitar situaciones que, al menos en la percepción de los militares, hubieran requerido como solución la aplicación de medidas de represión masiva.

La estrategia del movimiento sindical peronista tuvo una ventaja importante: su poder se materializó, en buena medida, a través de las acciones de otros actores. Esto permitió a los sindicalistas disociarse de las consecuencias indeseables de los ciclos de golpes y repliegues de los militares, como ocurrió reiteradamente entre 1955 y 1966. La estrategia sindical tuvo, además, otras dos características. Por una parte, que el movimiento sindical promoviera el logro de sus objetivos a través de otros actores dio lugar a que los objetivos de estos "intermediarios" interfirieran o modificaran parcialmente los propios del

movimiento sindical. Por otra parte, que el poder del sindicalismo se manifestara principalmente a través de la imposición de restricciones a las acciones de otros actores ocultó su incapacidad para formular un diagnóstico propio de la crisis estructural que afectaba la economía argentina desde fines de la década de 1940 y para proponer respuestas.¹³

Finalmente, esta capacidad defensiva permitió al sindicalismo obstaculizar la implementación definitiva de las políticas de estabilización económica que se propusieron retrasar los salarios con respecto a los aumentos de los otros precios, e inducir, de ese modo, un aumento de la inversión privada. A partir de 1959, el poder defensivo de los sindicatos fue ejercido con cierta "demora", materializándose sólo después de que las políticas de estabilización lograran algunos "éxitos" con respecto a la reducción de los salarios reales y la represión de las demandas obreras.¹⁴ En consecuencia, la capacidad defensiva del sindicalismo se manifestó principalmente a través de la articulación de "actores de contraataque". Éstos tuvieron el efecto de anular, al menos parcialmente, el impacto negativo inicial que los programas de estabilización habían producido en los niveles de salario y empleo. Pero, aun así, la resistencia sindical no pudo revertir algunos de los cambios introducidos en la economía. Durante el período 1959-1961 —al igual que entre 1967 y 1969— se dio una importante expansión de los sectores industriales caracterizados por ser capital intensivos y contener una presencia predominante del capital extranjero. Luego de la década de rápido crecimiento inaugurada hacia fines de la guerra, el nivel de empleo industrial se estancó, hacia mediados de los años 50; a su vez, los aumentos de la productividad de la mano de obra industrial fueron sustancialmente mayores que los aumentos de los salarios reales. En resumen, el despliegue exitoso de las acciones de contraataque del movimiento sindical impidió la completa ejecución y consolidación de los proyectos de estabilización y crecimiento de fines de la década del 50 y principios de los años 60, pero no pudo revertir las significativas transformaciones sufridas por la economía argentina a partir de 1959.

*Los militares del período posterior a 1955:
nuevos estilos de intervención política*

Los militares constituyeron el tercer elemento importante de la fórmula política que emergió a partir de 1955. El éxito de la insurrección militar de ese año inauguró un nuevo patrón de intervención militar en la política argentina. Entre 1930 y 1955, las Fuerzas Armadas se habían constituido en guardianas de

13. Desde principios de los años 50 se fue tornando crecientemente evidente que la fórmula económica vigente desde la Segunda Guerra Mundial no podía mantener por mucho tiempo los niveles de salarios y empleo, siendo necesario, en consecuencia, que se produjeran profundas alteraciones de la estructura económica.

14. Los que aquí se categorizan como "éxitos" lo fueron con respecto de las políticas de estabilización y no del modelo desarrollado. *Strictu sensu*, el modelo desarrollista no requería retrasos salariales. Éstos, más bien, constituyeron requisitos políticos destinados a cimentar la confianza de los sectores dominantes.

los gobiernos constitucionales, derrocando tres administraciones civiles. Sin embargo, a excepción del corto período entre 1943 y 1945, los militares se abstuvieron de participar directamente en la conducción del Estado a lo largo de esos veinticinco años. Durante los gobiernos conservadores de los años 30 y principios de la década de 1949, así como durante la presidencia de Perón entre 1946 y 1955, no tuvieron una participación significativa en el manejo de los asuntos públicos, más allá de su presencia al frente de algunas empresas del Estado.

Tampoco se propusieron institucionalizar regímenes no democráticos controlados permanentemente por las Fuerzas Armadas.

A partir de 1955, los militares modificaron gradualmente ese patrón de intervención. Durante una primera etapa, desarrollaron un estilo de intervención tutelar, que resultó en 1) la exclusión del peronismo del proceso electoral y de las instituciones representativas del Estado, y 2) el ejercicio de presiones y de su poder de veto sobre las medidas e iniciativas políticas del gobierno constitucional instalado en 1958, con el propósito de imponer sus propias preferencias en los asuntos públicos. Por lo tanto, durante el período de intervención tutelar, los militares coartaron las prácticas y los principios democráticos de dos maneras. Denegaron el derecho a elegir los candidatos de su preferencia a una porción significativa de la ciudadanía, y recurrieron repetidamente a la amenaza de deponer a las autoridades constitucionales si las mismas no satisfacían sus demandas. Por supuesto, todo esto se hizo en nombre de la democracia. El peronismo y, luego de 1959, el comunismo, fueron equiparados con la "antidemocracia". En consecuencia, las acciones emprendidas contra los peronistas, los comunistas y contra los políticos y funcionarios públicos que supuestamente los respaldaban o simplemente los toleraban fueron justificadas con el argumento de que tales acciones estaban destinadas a proteger la democracia de sus enemigos.

A principios de la década de 1960, importantes sectores de las Fuerzas Armadas comenzaron a darse cuenta de que los beneficios obtenidos mediante la intervención tutelar eran inferiores a los costos ocasionados por ésta. La invocación militar a un respaldo de las organizaciones políticas "democráticas" había forzado a las Fuerzas Armadas a restringirse a las alternativas políticas que ofrecían los partidos así calificados. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas concluyeron que eran percibidas por la opinión pública como responsables de la distorsión de las prácticas democráticas, sin siquiera obtener el beneficio compensatorio de que sus objetivos se cumplieran. Además, el alto grado de compromiso de los militares con el manejo de los asuntos públicos implicó que debieran asumir con frecuencia posiciones específicas con respecto a asuntos de política económica, represión política, legislación laboral y cuestiones semejantes, lo cual, como fue de esperar, contribuyó a generar una profunda fragmentación interna. En ciertas ocasiones tal fragmentación tuvo como origen el apoyo dado por algunos oficiales a la posición de determinados partidos políticos. Más a menudo, el disenso interno y la fragmentación surgieron cuando distintos sectores de las Fuerzas Armadas no estuvieron de acuerdo en relación con cuestiones tales como el alcance y la naturaleza de las presiones que se

ejercerían sobre las autoridades constitucionales, o las políticas que se aplicarían con respecto a los sindicatos y al partido peronista. La fragmentación militar alcanzó su punto más crítico entre los años 1959 y 1963, a raíz de confrontaciones entre facciones opuestas que, en dos ocasiones, culminaron en enfrentamientos armados. La victoria de una de estas facciones militares en 1963 —los “azules”— y la emergencia del general Onganía como indiscutido hombre fuerte del Ejército abrieron el camino a una profunda reevaluación de la estrategia política de los militares.¹⁵ En consecuencia, las prácticas de intervención tutelar, que habían prevalecido desde 1955, fueron rápidamente abandonadas, en la medida que se las percibió como responsables de la pérdida de prestigio y unidad de las Fuerzas Armadas. A partir de 1963, con el advenimiento de los radicales del pueblo al poder, los militares suspendieron en buena medida su intromisión en los asuntos de gobierno. Sin embargo, tal como los eventos pronto lo demostrarían, ese cambio no significó que las Fuerzas Armadas repentinamente hubieran aceptado que debían autoconfinarse al cumplimiento de sus tareas específicas, con estricta subordinación a las autoridades constitucionales. Por el contrario, el interregno “profesionalista” de 1963-1966 —y la paralela reunificación del ejército, y del conjunto de las Fuerzas Armadas, alrededor de Onganía— precedió e hizo posible la articulación definitiva de la doctrina de la “seguridad nacional”. Uno de los principales corolarios de la doctrina emergente fue que las Fuerzas Armadas deberían asumir la responsabilidad única en el manejo de los asuntos públicos, con la consiguiente exclusión de los partidos políticos y la abolición de los comicios y los mecanismos parlamentarios.

En algún momento, hacia la mitad de los años 60, Onganía y sus asociados llegaron a la conclusión de que el experimento semidemocrático iniciado en 1955 debía darse por concluido. La combinación que había prevalecido después del derrocamiento de Perón, es decir, un juego parlamentario permanentemente desbordado, pero no enteramente suplantado por las negociaciones y los enfrentamientos extrainstitucionales, tenía, desde el punto de vista de los militares, dos inconvenientes. En primer lugar, como ha sido señalado, creó condiciones que incentivaban la fragmentación militar. En segundo lugar, los militares interpretaron que esa situación inducía a los políticos a no trascender las demandas sectoriales de corto plazo de los diversos sectores sociales, haciendo de este modo imposible el crecimiento económico sostenido. A su vez, se sostuvo la fragmentación militar, y la proliferación irrestricta de conflictos sociales proveían un territorio fértil para la subversión.

El diagnóstico formulado por las facciones militares predominantes en 1966 tuvo profundas resonancias en el conjunto de la sociedad argentina; los grupos liberales, en particular, recibieron con beneplácito la posición antipartidista adoptada por las Fuerzas Armadas, pues tales grupos habían llegado a la conclusión de que, en el juego planteado por la política parlamentaria, les tocaba invariablemente elegir entre alternativas igualmente insatisfactorias. Por lo

15. Tradicionalmente, el Ejército ha sido el arma más poderosa, y el hecho de que la Armada se aliara, precisamente, con el sector que sería derrotado en los enfrentamientos de 1962-1963 —es decir, los “colorados”— consolidó aún más el rol dominante del Ejército.

tanto, el golpe militar y la posibilidad de fundar un régimen no democrático, permanente y estable, apareció ante los liberales como una opción tentadora. Ésta no sólo parecía resolver el problema planteado por su endémica carencia de votos, sino también —ellos esperaban— les proveería los medios para dar un golpe final, decisivo, a los sindicatos peronistas que tan exitosamente se habían constituido en uno de los actores políticos centrales del período 1955-1966.

Lo que resultó en parte paradójico, sin embargo, en 1966, fue que las consignas de los militares liderados por Onganía fueron acogidas con beneplácito no sólo por los liberales sino también por el actor a quien, precisamente, los liberales querían liquidar: el sindicalismo peronista y la corriente hegemónica dentro de él, o sea, el vandomismo.¹⁶ El hecho de que tanto los liberales como los sindicalistas aparecieran apoyando el golpe militar de 1966 reflejó dos cosas: la ambigüedad inicial de las propuestas de Onganía en materia de política económica y el atractivo que tuvo para el vandomismo la posibilidad del establecimiento de un régimen político autoritario. Esta última circunstancia fue una consecuencia de la afinidad de los sindicalistas peronistas con las invocaciones al orden, la unidad, el verticalismo, el anticomunismo y la tutela estatal ocuparon un lugar preponderante en la ideología esbozada inicialmente por Onganía y la corriente paternalista organicista de las Fuerzas Armadas.¹⁷ Si bien las acciones obreras durante la segunda mitad de la década del 50 —cuando los peronistas habían restablecido su redefinido predominio dentro de la clase— habían resultado en transgresiones muy serias a aquellas invocaciones, los dirigentes sindicales redescubrieron rápidamente ingredientes de la ideología peronista que resultaban consonantes con los esquemas de militares como Onganía. Dicha consonancia se expresó tanto en las visiones de organización social que inspiraron las estrategias del vandomismo como en las modalidades de estructuración del movimiento sindical que procuraron implementar. Uno de los principales dirigentes peronistas del período 1957-1966 sugería estas coincidencias de manera muy gráfica:

... el movimiento sindical en los países en vías de desarrollo debe ser verticalista como los cuerpos estructurados —la Iglesia, el Ejército, la familia—, pues es la única manera de aunar criterios con el fin de presionar efectivamente y evitar el desorden, que tanto puede ser provocado por el afán desmedido de lucro de parte de los empresarios como por las demandas incontroladas de los obreros. Además, en la Argentina, un movimiento verticalista recupera la tradición caudillesca. El sindicalismo, asimismo, debe actuar al calor oficial. El Estado debe ser padre protector así como lo es de la industria, el comercio y el agro.¹⁸

Un acuerdo político con los militares goñistas se convirtió en una tentación

16. Cf. M. Cavarozzi, *Sindicatos y política...*, pp. 59-65.

17. Para un análisis de las corrientes internas de las Fuerzas Armadas durante el gobierno instalado en 1966, cf. G. O'Donnell, *El Estado burocrático-autoritario: 1955-1973*. Buenos Aires, De Belgrano, 1982.

18. M. Cavarozzi, *Sindicatos y política...*, p. 62.

cada vez mayor para dirigentes sindicales vinculados a un movimiento político cuya proscripción electoral, renovada por los gobiernos semidemocráticos previos a 1966, se estaba transformando en un dato estable de la política argentina. La intervención de los trabajadores en la orientación del futuro económico del país, que los sindicalistas peronistas venían demandando desde 1957, parecía poder llegar a materializarse sólo si se privilegiaban vías de participación alternativas al semibloqueado carril partidario electoral. La presencia de militares que, por una parte, condenaban el juego partidario *in toto*, y no simplemente al peronismo, y, por la otra, parecían responder a consignas de tono nacionalista, estatista y anti gran capital fue, entonces, vista por los sindicalistas peronistas como el posible agente catalizador de un régimen político no parlamentario que sirviese para cimentar la alianza entre Fuerzas Armadas y sindicatos que, supuestamente, se había frustrado en 1955.

EL PREDOMINIO MILITAR Y LA PROFUNDIZACIÓN DEL AUTORITARISMO

Como señalé antes, las fórmulas políticas ensayadas a partir de 1966 tuvieron un carácter marcadamente más totalizador que las visiones y concepciones que subyacieron a los gobiernos militares y constitucionales del período 1955-1966. Durante la década posterior al derrocamiento de Perón, cada quiebra institucional no alteró, sino que, por el contrario, contribuyó a conformar una manera común de hacer política, al definir una fórmula que se basó en su propia crisis permanente dentro de los límites puestos por las pretensiones relativamente modestas de los actores predominantes: los políticos y los militares. Los primeros, que quisieron consolidar una democracia, pero la negaron permanentemente al no atreverse, o no poder, incorporar plenamente al peronismo, y los segundos, que pretendieron reservarse poderes de veto y de tutela, pero sin proponerse instaurar un régimen autoritario estable dominado por las Fuerzas Armadas.

A partir de 1966 subsistió el patrón de alternancia entre gobiernos militares y civiles; sin embargo, como ya se apuntó, la similitud con la década previa fue, en ese sentido, solamente superficial. En realidad, a pesar del naufragio de los proyectos de 1966, 1973 y 1976, cada cambio de gobierno estuvo asociado a una ruptura con respecto a las modalidades previas de hacer política e introdujo novedades significativas. En otras palabras, el retorno a una situación de equilibrio relativo no ocurrió sin que el despliegue y el agotamiento de las respectivas fórmulas políticas produjeran efectos deseados e impactos imprevistos y desataron procesos que, en cada caso, contribuyeron a redefiniciones sustantivas de la escena política y social; ejemplos de estos procesos fueron las movilizaciones sociales del período 1969-1973, la militarización de la política y el estilo de represión estatal ilegal y masiva inaugurado en 1974 y acentuado en 1976 y la profunda crisis económica desatada a partir de 1981.

Desde 1966, entonces, no ha habido una manera común de hacer política, como ocurrió en el período previo. A pesar de que, por supuesto, existieron

continuidades desde ese año hasta aquí, cada corte institucional redefinió cualitativamente el material político a disposición de los actores fundamentales de la sociedad argentina. Esta circunstancia torna conveniente un ordenamiento diferente al de la sección anterior: cada período gubernamental será analizado por separado y, al final, a título de conclusión, se subrayarán algunas de las características centrales de la política argentina en el presente a fin de sugerir cuáles son las posibilidades y los límites con que se enfrentarán en el futuro sus actores.

El golpe de 1966: la suplantación de la política por la administración

El transcurrir de los años del gobierno de los radicales del pueblo inaugurado en 1963 sirvió para reforzar las tendencias que habían sido prenunciadas por los episodios que rodearon la caída de Frondizi en 1962: la cada vez más decidida inclinación de la gran burguesía y de los sectores liberales a apoyar la instalación de un régimen no democrático; la escasa predisposición de los sindicalistas peronistas a contribuir a legitimar y estabilizar gobiernos semidemocráticos que continuaban proscribiendo a su movimiento y el progresivo “deslizamiento” autoritario de las Fuerzas Armadas.

En junio de 1966, la culminación de la tarea de “profesionalización” de las Fuerzas Armadas encarada por el líder triunfante de los enfrentamientos militares de 1962-1963, el general Onganía, coronó la coincidencia implícita de liberales y sindicalistas en apoyo al golpe militar que derribó a Arturo Illia. O'Donnell¹⁹ señala acertadamente que Onganía indujo la materialización del “factor ausente” entre 1956 y 1963 —la unidad militar— al conducir la

... reacción “profesionalista” [que apuntaba] a lograr cohesión interna, aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y capacitarlas para la comprensión de problemas sociales desde la óptica de las doctrinas de seguridad nacional que comenzaban a prevalecer en el continente. Este intento se conectaba con el diagnóstico de que el fraccionamiento interno se debía a la constante intervención en la política nacional en alianza con, y en función de las metas de, partidos políticos y grupos civiles.

Los objetivos que se propuso la “Revolución Argentina” fueron congruentes con el aludido diagnóstico: por un lado, suspender *sine die* las actividades de los partidos políticos y de las instituciones parlamentarias; por el otro, consagrar expresamente la desvinculación de las Fuerzas Armadas del gobierno disponiéndose que éstas “... no gobernarían ni cogobernarían”.²⁰ Todo esto no hizo sino reconocer, e intentar implementar, los corolarios del consenso que rodeó al golpe: la erradicación de la “partidocracia” y la presunción, y la esperanza, de

19. G. O'Donnell, *El Estado burocrático...*, p. 85.

20. Simbólicamente, se procedió a confiscar los edificios de propiedad de los partidos transfiriéndolos al Ministerio de Educación mientras que en el edificio del Congreso nacional fue instalado el flamante Consejo Nacional de Seguridad.

que el líder de la exitosa operación de unificación de las Fuerzas Armadas se transformaría en una especie de monarca autocrático ocupando la cúspide de un régimen en el que el único que haría política sería el gobierno.²¹ En otras palabras: producida la unidad (militar y social) y superado el conflicto, la política dejaría el lugar a la administración con el resultante predominio de técnicos situados por encima de los intereses sectoriales y capaces de proponer e implementar las soluciones óptimas. La fórmula institucional de la "Revolución Argentina" se vio coloreada, asimismo, por una retórica corporativística que puso el énfasis en la gradual articulación de "consejos de la comunidad" encargados de canalizar las actividades de las organizaciones sociales y de servir como mecanismos consultivos y asesores de las autoridades.

La centralidad que ocupó en la propuesta de Onganía la temática de la renovación (y simplificación) de la política argentina no fue casual. Respondió a la convicción de que el problema de la Argentina era fundamentalmente político, y que de lo que se trataba era de barrer con la complicada, ineficiente, y eventualmente peligrosa, intermediación de los circuitos partidarios, parlamentarios y corporativos para que se desplegaran plenamente las potencialidades de crecimiento económico. En el plano de la economía la fórmula del gobierno de Onganía no resultó demasiado novedosa. Consistió principalmente en reeditar, con algunas modificaciones, y presumiblemente liberadas de los límites impuestos por las modalidades políticas prevalecientes hasta 1966, las recetas desarrollistas ensayadas entre 1959 y 1962. Los objetivos del desarrollismo habían sido los de reinsuflar dinamismo a la economía sobre la base de completar la integración vertical del sector industrial y el desarrollo y la modernización de la infraestructura y, paralelamente, restaurar el predominio de las unidades oligopólicas y más transnacionalizadas dentro de esos sectores.²²

La política argentina pareció por un par de años transitar por los carriles prescriptos por Onganía y sus asociados. Aparte de los éxitos económicos alcanzados hasta la primera mitad de 1969 —una normalización sin costos sociales demasiado elevados, aumento de la inversión, descenso de la tasa de inflación, mejoría en la situación de la balanza de pagos— el gobierno se anotó una serie de importantes triunfos políticos: los partidos cayeron en un pozo de irrelevancia e inactividad, los sindicatos fueron forzados a aceptar sucesivamente la abolición, en la práctica, del derecho de huelga —a causa de la sanción de la ley de arbitraje obligatorio de agosto de 1966— y la intervención gubernamen-

21. Esta concepción fue explicitada por el subsecretario del Interior Díaz Colodrero en un discurso citado por O'Donnell (*El Estado burocrático...*, p. 1249): "Se le reprocha a este gobierno carecer de un plan político y no se advierte que ese plan, en su primera fase, existe y ha dado buenos frutos. Ha consistido hasta hoy en algo muy simple y al mismo tiempo muy complejo y difícil de lograr: hacer la unidad y la pacificación nacional y restablecer el orden y la autoridad del gobierno. La nuestra es una política de hechos".

22. En este sentido, se debe señalar que el plan económico propuesto por Krieger Vasena, ministro de Economía de Onganía entre 1967 y 1969, incorporó el recetario liberal, que ponía el acento en la "normalización" pero subordinándolo al objetivo de crecimiento. Cf. G. O'Donnell, *El Estado burocrático...*, caps. II y III, para una interpretación en la que se enfatiza algo más el "liberalismo" de Krieger Vasena.

tal de los gremios industriales más importantes como resultado del rotundo fracaso del "plan de acción" de comienzos de 1967, y Perón fue convirtiéndose en una especie de muerto político aparentemente despojado de todas las armas que había utilizado tan eficazmente entre 1955 y 1966 para desestabilizar a gobiernos civiles y militares. Paralelamente, se generó por un lapso la impresión de que se estaba conformando un eficiente y armonioso sistema de decisiones en el que los protagonistas principales, y casi exclusivos, eran aquellos que ocupaban los despachos gerenciales de las grandes empresas y los cargos jerárquicos de las instituciones estatales encargadas de diseñar e implementar la política económica.

Sin embargo, durante los dos años y medio transcurridos entre fines de 1966 y mediados de 1969 hubo dos espacios, sobre todo, en los cuales fueron dándose fenómenos novedosos cuyas repercusiones sobre la política nacional sólo se manifestarían a partir de mayo de 1969. El primero fue la creciente gravitación que fue adquiriendo el mayor perfilamiento de las corrientes internas dentro de las Fuerzas Armadas —paternalistas, nacionalistas y liberales— cuyas respectivas características e interrelaciones analiza magistralmente O'Donnell en su ya citada obra.²³ Las causas subyacentes de las divergencias entre las corrientes no fueron nuevas; ellas, a menudo, giraron en torno a temas tales como la política a seguir con respecto al movimiento sindical, los objetivos de transformación económica a largo plazo, el modelo político a instaurar después de completadas las etapas de ordenamiento y depuración. Lo que sí cambió radicalmente a partir de 1966 fue que las disensiones internas de las Fuerzas Armadas se dieron dentro de un ordenamiento institucional en el que quedaba presuntamente excluida la permanente gimnasia conspirativa que los militares habían desarrollado entre 1955 y 1966 tanto frente a regímenes constitucionales como dentro de gobiernos de facto temporarios. A esto se agregó, como veíamos, que a las Fuerzas Armadas se les vedó expresamente la participación directa en tareas gubernativas; el efecto combinado de una y otra circunstancia fue que las tensiones y conflictos internos de los militares y los contactos con personajes externos claves perdieron legitimidad y pasaron a tener lugar cada vez más subterráneamente. La consecuencia previsible fue que el caudillo militar de los tres años previos fue quedando progresivamente aislado de sus camaradas de armas. Además, la rígida personalidad de Onganía contribuyó también a que se fueran evaporando las posibilidades de que éste respondiera a sugerencias o presiones de dichos camaradas a través de ajustes parciales o negociaciones. Como el "Estatuto de la Revolución Argentina" no había fijado plazos para la gestión del presidente ni había previsto transiciones, el gobierno de Onganía no tuvo "fusibles", con lo que el riesgo de que ante una situación de crisis el juego adquiriera rápidamente un carácter de todo o nada era enorme.

El segundo espacio en el que se produjeron modificaciones significativas fue el de una serie de ámbitos de la sociedad civil que, hasta 1966, habían sido dominados, en buena medida, por la lógica de negociaciones y presiones extrainstitucionales, pero controladas, descrita en la sección anterior. En ese

23. Cf. G. O'Donnell, *El Estado burocrático...*, pp. 85-103 y 123-130.

sentido resulta conveniente precisar el significado del control al que se alude. Entre 1955 y 1966 algunas organizaciones fundamentales de la sociedad civil, como los sindicatos y las asociaciones empresariales, desbordaron permanentemente los canales institucionales gubernamentales; sin embargo, siempre lo hicieron procurando evitar ser ellas mismas desbordadas por la movilización de sus propios miembros. Como este propósito fue generalmente alcanzado, las movilizaciones y las acciones colectivas de obreros y empresarios se subordinaron, casi sin excepciones, a una lógica de negociación de cúpulas que jerarquizó, particularmente en el caso de los sindicatos, la supervivencia de las respectivas organizaciones corporativas y la estabilidad de sus dirigentes. Dentro de este esquema, los dirigentes tendieron a utilizar la movilización como arma para el chantaje frente a otros actores y el Estado, valorizando no sólo su capacidad de generar dichas movilizaciones sino también la de encauzarlas, e incluso refrenarlas.

Las medidas antisindicales tomadas a partir de fines de 1966 no liquidaron a los gremios ni a sus dirigentes —tampoco era esa su intención— sino que los forzaron a aceptar dócilmente las políticas gubernamentales. El éxito de la estrategia oficial de intransigencia se sumó a otras causas que venían minando el poder y el grado de control de la dirigencia sobre las bases obreras desde antes del golpe de junio de 1966. Entre éstas pesaron preponderantemente la política de las grandes empresas en sectores de punta —como el automotor y el de los tejidos sintéticos— de promover la creación de sindicatos por empresa en desmedro de las uniones y federaciones que celebraron acuerdos salariales de alcance nacional, y la estrategia del gobierno de los radicales del pueblo de favorecer el pluralismo sindical buscando través de una serie de mecanismos el debilitamiento de los sindicalistas peronistas.²⁴ En 1968 comenzó a insinuarse un proceso, que se profundizó a partir de 1969, por el cual se resquebrajaron las complejas ligazones que, desde principios de la década, habían mantenido articulado un sindicalismo relativamente unificado con eje en el poderoso dirigente del gremio metalúrgico Augusto Vandor.²⁵ Entre 1959 y 1966 el poder del vandorismo había resultado de su capacidad de subordinar a una lógica común los restantes nucleamientos sindicales peronistas y no peronistas, a pesar de que éstos habían perseguido, a menudo, objetivos diferentes de los de Vandor. Durante 1968-1969 el vandorismo comenzó a perder buena parte de esa capacidad al ser flanqueado por la derecha y desbordado por la izquierda. Los “blandos”, que inspirándose en la jerga oficial fueron rebautizados como “participacionistas”, se fortalecieron significativamente en la medida que,

24. Juan Carlos Torre (“Sindicatos y trabajadores bajo el último gobierno peronista”, mimeo, 1979, pp. 19-20) señala estas dos causas y con respecto a la segunda constata que “entre 1964 y 1966 el gobierno radical del pueblo lanzó una vasta ofensiva estatal dirigida a controlar y debilitar a la poderosa oposición de los jefes sindicales peronistas. El Ministerio de Trabajo comenzó a ejercer una celosa vigilancia sobre el gobierno interno de las organizaciones gremiales fiscalizando las elecciones y el manejo de los fondos. Esta ofensiva, inspirada por razones políticas, tenía, no obstante, poderosas razones en las que apoyarse porque la supresión de la democracia sindical y el uso discrecional de los recursos gremiales eran prácticas corrientes en la conquista y la consolidación en el poder de los jefes sindicales peronistas”.

25. Cf. M. Cavarozzi, “Sindicatos y política...”, pp. 50-55.

favorecidos por el patrocinio estatal, mantuvieron plenamente el control de la maquinaria y los recursos de los gremios en el que predominaban. Asimismo, la ruptura por parte del gobierno del diálogo con los vandoristas privó casi totalmente a éstos de una de las dos patas en las que se apoyaba su estrategia, es decir, la negociación con el Estado. Esto último desvalorizó el argumento vandorista de que una postura menos intransigente (que la de los “duros” o “combativos”) producía mejores resultados. Y fue, precisamente, la desvalorización de la estrategia vandorista lo que permitió que en marzo de 1968, en un congreso normalizador de la CGT convocado sin el reconocimiento gubernamental, una heterogénea combinación que incluía a peronistas duros —en muchos casos influidos por una ideología de “izquierda cristiana”—, “independientes” progresistas, a marxistas ajenos a la ortodoxia del Partido Comunista, se impusiera al vandorismo y designara a Raimundo Ongaro, un obrero gráfico, secretario general de la CGT. Inmediatamente Vandor desconoció los resultados y convocó a un nuevo congreso que nombró otra mesa directiva, con lo que, en la práctica, pasó a haber dos CGT. En parte debido a la represión oficial y en parte como resultado de sus tácticas erráticas, la CGT de los Argentinos —tal fue el nombre que adoptó la entidad dirigida por Ongaro— fue perdiendo rápidamente la adhesión de la mayoría de los sindicatos que la habían integrado. Sin embargo, su discurso de oposición frontal al régimen de Onganía y de condena a las tácticas de los “blandos” y los vandoristas fue acentuando los contenidos anticapitalistas y mantuvo vigencia, a menudo, a nivel de planta y de algunas regionales del interior del país. El discurso de la CGT de los Argentinos, en definitiva, se constituyó en un material ideológico y “práctico” disponible para ser apropiado por otros protagonistas en acciones colectivas más masivas.

Las insurrecciones populares de 1969, que tuvieron su episodio más significativo en el Cordobazo, fusionaron a obreros, empleados, estudiantes y pobres urbanos, y, como acota O'Donnell,²⁶

... expresaron, y en parte fueron, el disparador de las tensiones que se habían ido acumulando desde la implantación [del gobierno militar].

El intento de Onganía de eliminar las trincheras del juego político, clausurando los múltiples mecanismos institucionales y extrainstitucionales a través de los cuales el compromiso había predominado en la sociedad y en la política argentinas y pretendiendo canalizar y “ordenar” los diversos intereses y orientaciones sociales desde un Estado supuestamente omnisciente y jerárquico, terminó por producir lo que, de alguna manera, había venido a erradicar como posibilidad en la Argentina. A la inesperada y espontánea explosión popular, que expresó, entre otras cosas, el aislamiento e ignorancia del gobierno frente a la sociedad, se sumó la renuencia de las Fuerzas Armadas a desencadenar una represión más sistemática y severa que la aplicada hasta entonces, como lo requería un Onganía que había perdido noción, asimismo, de lo que estaba ocurriendo, bajo la superficie, dentro de las instituciones militares.

26. Cf. G. O'Donnell, *El Estado burocrático...*, p. 257.

La imagen de un Estado aislado, cuyo discurso autoritario de pronto perdió resonancia en la sociedad y se quedó sin soportes activos, sectoriales e institucionales, no sólo socavó irremediablemente la legitimidad del gobierno de Onganía sino que además impregnó a la misma sociedad atenuando la opacidad con que normalmente están recubiertos los fundamentos autoritarios de sus instituciones y de sus prácticas. A partir de 1969 se superpusieron, entonces, dos crisis: por un lado, la del régimen militar autoritario, crisis cuyo despliegue pasó a ser gobernado por el entrecruzamiento de los conflictos internos de las Fuerzas Armadas y las interrelaciones entre un gobierno cada vez más acorralado y un frente de oposiciones políticas que fue progresivamente convergiendo en torno de la persona de Perón; por el otro, la crisis de la dominación social, que se expresó a través de la incertidumbre acerca de

... la continuidad de prácticas y actitudes antes descontadas como "naturales" de clases y sectores subordinados. Esto puede aparecer en la caducidad de ciertas pautas de deferencia hacia el "superior" social, en diversas formas expresivas "inusuales", en cuestionamientos de la *autoridad* habitual en ámbitos como la familia y la escuela y como una impugnación del *mando* en el lugar de trabajo.²⁷

Es en ese sentido como se puede afirmar que en 1969 se abrió un período inédito en la historia argentina, en el que resultó profundamente cuestionada y corroída la autoridad de muchos de aquellos "que dirigían" las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en los casos de quienes aparecían más directamente "garantizados" por el Estado. Dentro de esta categoría quedaron incluidos los dirigentes sindicales más propensos a la negociación y más dependientes de la tutela estatal, los profesores y las autoridades de universidades y escuelas que se habían respaldado en, y habían sido promovidos por, las orientaciones tradicionalistas y jerárquicas del gobierno de Onganía, la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y los gerentes y empresarios que, debido a las limitaciones impuestas a la acción de los jefes sindicales, las comisiones de fábrica y los delegados obreros, se habían sentido con mayor respaldo para reorganizar procesos de trabajo, "racionalizar" la producción y restaurar la disciplina laboral.

Desde el Cordobazo hasta la defenestración del efímero sucesor de Onganía, el general Levingston, la agudización de la crisis del régimen militar jugó de modo de acentuar la seriedad de las amenazas a las bases mismas de la dominación social. El empecinamiento de Onganía en procurar el imposible salvamento de su esquema, primero, y el intento de Levingston de "profundizar" la "Revolución Argentina" dándole un carácter más nacionalista y movilizacional, después, no sólo terminaron por alienarles definitivamente el apoyo del grueso de sus camaradas, sino que, además, sirvieron para acentuar la crisis social al superponer, y a veces fusionar, las contestaciones antiautoritarias con las

27. G. O'Donnell, *El Estado burocrático...*, pp. 51-52 (el subrayado me pertenece). Algunos antecedentes del tema se pueden ver en Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State*, Londres, Verso, 1975, y en Marcelo Cavarozzi, "Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico", en *Revista Mexicana de Sociología*, 78, p. 4.

primeras manifestaciones de otros tres tipos de cuestionamientos: 1) aquellos centrados en las políticas económicas "liberales" y que comenzaron a exigir cada vez más audazmente la satisfacción de las reivindicaciones de los sectores más postergados a partir de 1967, como los empleados públicos y privados de niveles de calificación más bajos, los pequeños y medianos empresarios (afectados por medidas tales como la liberación de los alquileres urbanos y las restricciones impuestas a las cooperativas de crédito), los trabajadores de industrias y servicios más tradicionales especialmente perjudicados por el programa modernizante del gobierno militar, y la población de aquellas regiones, como Tucumán, que resultaron afectadas por programas de racionalización económica; 2) aquellos que, en un primer momento, reclamaron la liberalización política del régimen militar, para pasar luego a exigir una plena democratización con la celebración de elecciones sin proscripciones ni condicionamientos, y 3) aquellos que, sobre todo desde el ámbito de la incipiente guerrilla peronista, plantearon el objetivo de promover la insurrección popular armada para instaurar un orden social y político alternativo de carácter no parlamentario y "socialista nacional".

La agudización de la crisis tuvo como efecto que se desarticulara lo que podría denominarse, y perdonésemelo el término, la habitualidad política construida desde 1966. Sacudidos el miedo y la pasividad política que por tres años había exitosamente impuesto la dictadura, los mecanismos políticos propuestos por ésta perdieron sentido de modo vertiginoso y dejaron de ser el referente orientador de las acciones de sus anteriores partidarios y de sus opositores. Al mismo tiempo, sin embargo, los proyectos de Onganía y Levingston de entrar en el "tiempo social" y de promover la creación de un "movimiento nacional" que seguiría postergando a los partidos y se basaría en un reaceramiento con los sindicatos, respectivamente, continuaron ocupando el centro de la escena política. ¿Cuál fue la consecuencia de la obstinación y la ceguera de ambos presidentes?

Durante un lapso quedó bloqueada la posibilidad de emergencia de un proyecto alternativo del gobierno de rearticulación de las orientaciones y acciones de las distintas fuerzas que operaban en la sociedad argentina. Esta "demora" fue tornándose cada vez más peligrosa: al progresivo espanto que despertaron en la gran burguesía propuestas que se alejaban del esquema normalizador de Krieger Vasena se fue sumando el aludido agudizamiento de la crisis social con la difusión de consignas más radicales; éstas alcanzaron su pico en el segundo Cordobazo a principios de 1971, que tuvo contenidos más clasistas e insurreccionales que el primero. En realidad, la propuesta alternativa del gobierno militar no podía ser otra que la de un repliegue que admitiera las derrotas sufridas y reconociera que el reequilibramiento social debía transitar por una apertura política que incorporase temas, demandas de las fuerzas opositoras. En un primer momento, y coincidiendo con el postrer año del régimen de Onganía, lo que estuvo en danza fue una suerte de liberalización en torno a la figura del ex presidente Aramburu, cuyo secuestro y asesinato por la guerrilla peronista en mayo de 1970 precipitó la caída de Onganía. Con la desaparición de Aramburu y la "pérdida de tiempo" ocasionada por la "profundización" ensayada por Levingston, la única opción restante fue la de

una promesa de democratización, en la que los militares, reflatando el argumento de que en realidad ellos se habían propuesto restablecer la “verdadera democracia”, consintieran en traspasar el poder a un gobierno surgido de elecciones.

La operación implementada por el tercer presidente militar, el general Lanusse, partió precisamente de reconocer el limitado margen de iniciativa del gobierno, desplazando el eje de la política del plano de la crisis social al de la dilucidación de las características específicas del régimen que reemplazaría la dictadura militar. A pesar de que Lanusse y los militares sufrirían una serie de derrotas en las pujas por la determinación de la naturaleza del régimen de reemplazo, esto no debe ocultarnos, sin embargo, que durante esos meses cruciales se entretejió, de alguna manera, el tramado de la política con la recomposición de una cierta habitualidad que sirvió para cerrar, al menos parcialmente, la brecha de imprevisibilidad e indeterminación (acerca de la dirección y los resultados de la crisis) abierta a partir de mayo de 1969. Este proceso tuvo como principal virtud —desde el punto de vista del reequilibramiento de la dominación social— la de rearticular la crisis social (y los cuestionamientos a la autoridad en ámbitos e instituciones de la sociedad civil) a las pujas y conflictos en torno a la cuestión del régimen político.

La reorientación y rearticulación de la crisis no resultó ajena a la operación gubernamental inaugurada por Lanusse. La asunción de la presidencia por Lanusse permitió al gobierno recuperar, en parte, la capacidad de determinar cuáles serían los campos en los que se librarían las batallas políticas de la sociedad argentina; ello no significó, claro está, que el gobierno y los militares fueran a ganar estas batallas.²⁸ De todas maneras, el limitado “éxito” gubernamental tuvo sus costos. El poco ceremonioso reemplazo del segundo presidente de la “Revolución Argentina”, a menos de un año de la también abrupta salida de Onganía, sólo pudo ser justificada en la medida que Lanusse se comprometió a presidir la liquidación del régimen militar. El hecho de que las Fuerzas Armadas debieran limitar su objetivo a tratar de imponer las condiciones de su retirada de la cúpula del Estado le restó eficacia y credibilidad a sus políticas. Si bien eso no significó que los recursos, los valores y la capacidad represiva del Estado dejaran de ser datos de importancia, el horizonte obviamente limitado del gobierno militar pasó a influir decisivamente sobre los cálculos de todos los actores políticos. En suma, el gobierno recuperó parcialmente la capacidad de fijar los parámetros de la acción política a costa de renunciar a cualquier cuota de iniciativa que hubiera podido mantener, cediéndola irreversiblemente, por ende, a oposiciones que no controlaba.

A partir de marzo de 1971 las oposiciones capturaron decisivamente la iniciativa política. Los años de Lanusse resultaron bastante diferentes de los dos

28. En el ámbito gremial, por ejemplo, Lanusse, con un realismo no enteramente previsible en un militar de tan militante vocación antiperonista en el pasado, reconoció en gran medida la mayor legitimidad y representatividad que los dirigentes vanderistas tenían en relación con los participacionistas y se dedicó, con mucha mayor selectividad y eficacia que sus predecesores, a reprimir a los sindicalistas combativos y “clásistas” interviniendo gremios y seccionales controlados por éstos y tratando de neutralizar las movilizaciones obreras que ellos promovían y canalizaban.

años anteriores. No tanto porque las turbulencias políticas disminuyeran —en realidad, éstas se incrementaron debido a la continuidad de los conflictos sociales y la creciente espectacularidad de las acciones guerrilleras y de la represión—, sino, más bien, porque la política fue adquiriendo un carácter más pautado. Es decir, se pasó de una situación en la cual el gobierno fue desbordado (al pretender empecinada y autoritariamente imponer proyectos que no despertaban apoyos sociales significativos) y las acciones sociales quedaron sin cauces definidos, a otra en la que dichas acciones se fueron “organizando” en torno a nudos generados a partir de las iniciativas de actores políticos más o menos constituidos. En el caso de los actores que poblaban el campo de la oposición —es decir, Perón, los partidos no peronistas, los dirigentes sindicales y empresariales y la juventud radicalizada confluyente con la guerrilla— éstos se propusieron objetivos muy disímiles; sin embargo, todos compartieron una orientación común: el percibir la crisis social abierta en 1969 como el terreno apto, o como un instrumento, para alcanzar, de diferentes maneras, los objetivos propios. Así fue como Perón maniobró utilizando la crisis en función de su aspiración de convertirse en el eje obligado de cualquier definición política que resultara, los partidos trataron de realzar su cualidad de mecanismos útiles para la contención de la crisis, los dirigentes sindicales y empresariales reaccionaron de manera de defender sus privilegios corporativos y de aumentar su capacidad de maniobra en el futuro gobierno constitucional y la guerrilla, prenunciando la visión instrumental que profundizaría más adelante, reinterpretó los cuestionamientos celulares a la autoridad de aquellos que dirigían como la manifestación de un reclamo colectivo de constitución de un liderazgo político autoritario que condujera a la Argentina hacia la meta del “socialismo nacional”.

Las tácticas gubernamentales y, sobre todo, las coincidentes orientaciones de las oposiciones políticas y corporativas en el sentido de encauzar la crisis social para favorecer los objetivos propios contribuyeron decisivamente a que ésta fuera reabsorbida en una proporción significativa. ¿Qué quiere decir que fue reabsorbida? Aclarar esta idea requiere una breve digresión conceptual. La “normalidad” consiste en que una cuota significativa del sentido de las interacciones sociales para los individuos y grupos que las protagonizan —sean éstos patrones y trabajadores, padres e hijos, profesores y alumnos, dirigentes y miembros de un sindicato, hombres y mujeres— por un lado viene definido por agentes y referentes “externos” como los aparatos del Estado y las elites políticas, sociales, culturales y religiosas y, por el otro, aparece como la materialización de normas que trascienden a esos grupos e individuos, como por ejemplo las costumbres y las tradiciones. Uno de los elementos que define una crisis de dominación es que el poder y la repercusión de los agentes y referentes externos y de las normas sociales se debilita, con lo que la posibilidad de una redefinición “desde adentro” del sentido de las interacciones sociales aumenta correspondientemente. La reabsorción de la crisis consiste precisamente en el cierre o angostamiento de la brecha por la cual se filtran esas dosis de sentido autogenerado, y la consiguiente recaptura, por parte de los referentes externos, de su capacidad de determinar el sentido de las interacciones sociales.

En ese sentido, entonces, se puede afirmar que en la Argentina de 1971 a 1973 las prácticas de los agentes políticos, y particularmente de aquellos que componían el campo de la oposición política, contribuyeron a reabsorber o conjurar la crisis social. Todos esos agentes, incluso aquellos que se definían como los instrumentos del "cambio de estructuras", se situaron frente a las acciones sociales de carácter contestatario tratando de enhebrarlas a sus lógicas (las de los agentes), es decir, a lógicas orientadas casi exclusivamente a la conquista del poder político. Durante esos años, esas lógicas se enfrentaron en dos planos diferentes: por una parte, se dieron luchas entre el gobierno militar y las oposiciones que, en una proporción abrumadora, concluyeron en triunfos para estas últimas; por la otra, se fueron perfilando propuestas alternativas en el campo de la posición que, por lo general, no trascendieron el terreno de las consignas y las confrontaciones ideológicas. En general, los análisis del período se han concentrado casi exclusivamente en esos dos planos de la lucha política apuntando, correctamente, que ellas se dieron en el contexto de una inusitada apertura política y de un clima de agitada discusión ideológica. Asimismo, se han destacado las consecuencias de esas luchas sobre los acontecimientos posteriores a mayo de 1973 señalando, por un lado, que la derrota total de los militares determinó su repliegue hostil durante los primeros tiempos del gobierno peronista y, por el otro, que las propuestas alternativas del período prefiguraron los salvajes enfrentamientos que se desencadenaron dentro del frente triunfante en 1973, y en particular dentro del peronismo, cuando desapareció el sustrato unificador proporcionado por el objetivo común de desplazamiento del gobierno militar.²⁹

En todo caso, aquí no se pretende analizar la naturaleza de esas luchas; el propósito de los comentarios previos es, más bien, el de subrayar que la naturaleza de la crisis política entre 1971 y 1973 contribuyó a debilitar la autonomía de las contestaciones celulares de carácter antiautoritario. Esta circunstancia, que se acentuaria mucho más entre 1973 y 1975, en parte respondió a que los agentes políticos del período no privilegiaron la capacidad de las fuerzas actuantes en la sociedad civil de promover cambios en las relaciones sociales excepto en los casos que previeron que tales cambios contribuirían a fortalecer sus respectivas posiciones de poder. Estas conductas de los agentes políticos probablemente fueron efecto de su renuencia a aceptar las elevadas dosis de impredecibilidad e incertidumbre acerca de la dirección y los contenidos de los cambios que caracterizan las situaciones de crisis social. Asimismo, la reabsorción de la crisis resalta la dificultad para que procesos de cambio en las relaciones de dominación puedan trascender los ámbitos específicos de la sociedad civil en los cuales transcurren y logren, por ende, producir efectos perdurables en el conjunto de la sociedad a través de la universalización de sus discursos. Si a un nivel más abstracto se puede especular que esa circunstancia revela las resistencias que las sociedades modernas oponen a los

29. Cf. G. O'Donnell, *El Estado burocrático...*; Liliana De Riz, *Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista*, México, Folios, 1981, y Eduardo Viola, "Democracia e autoritarismo na Argentina contemporânea", tesis, Universidad de São Paulo, 1982.

efectos transformadores de las crisis, en el caso argentino podría estar señalando que las lealtades y las identificaciones políticas tradicionales anudadas en torno al peronismo, y en menor medida al radicalismo, resultan fundamentales en coyunturas críticas como la abierta en 1969. En efecto, la recaptura del centro de la escena política por parte de Perón (y, en alguna medida, también por Balbín, el presidente de la Unión Cívica Radical, a través de su coprotagonismo del agrupamiento de La Hora del Pueblo y de su reconciliación histórica con Perón) no sólo consagró el fracaso de la transición controlada a la que aspiraban Lanusse y los militares. La vigorosa reaparición de los viejos astros de la política argentina y la repercusión alcanzada por sus discursos parcialmente renovados también expresó la imposibilidad de las prácticas sociales contestatarias de generar un discurso propio pasible de difundirse en el conjunto de la sociedad. Este posible discurso propio no fue, en todo caso, el de las organizaciones guerrilleras. Éstas, en su premura por atribuir a las prácticas sociales sentidos que reflejaran sus programas e interpretaciones, también contribuyeron al proceso a través del cual las elites políticas argentinas enajenaron y reformularon los contenidos de la crisis social y las movilizaciones populares.

A pesar de lo que se apuntaba en el párrafo anterior, sin embargo, en mayo de 1973, cuando el peronismo triunfante accedió al poder, la situación política era, obviamente, muy diferente de la de 1966. La apertura democrática del período lanussista había atenuado los riesgos de la crisis social a costa de reforzar el arrinconamiento político de las fuerzas que habían predominado durante la etapa ascendente de la "Revolución Argentina". El cómo estas fuerzas revertirían la situación en un par de años y cómo la apertura democrática se cerraría abriendo el período más trágico de la historia argentina contemporánea se dilucidaría precisamente en el período constitucional que se inauguraba, en forma aparentemente auspiciosa, en 1973.

Retorno de Perón y fracaso de su proyecto de institucionalización política

A pesar de todas las diferencias que separaban a Perón del Onganía de 1966, el viejo líder retornó al poder en 1973 compartiendo uno de los puntos esenciales del diagnóstico original de la "Revolución Argentina", es decir, que el problema de la Argentina era de carácter político. Claro está que a partir de ahí las recetas fueron radicalmente opuestas, mientras que Onganía trató de abolir la política. Perón se propuso encauzarla institucionalmente.³⁰

La fórmula de Perón apuntó a crear un doble arco de articulaciones de los actores sociales y políticos. El primero no fue enteramente novedoso para el peronismo y consistió en el intento de reedición, en una versión mejorada y

30. En esta sección me propongo solamente caracterizar la fórmula política que Perón intentó desplegar a partir de 1973 y señalar algunas de las razones de su fracaso. Dos obras recientes, las de Eduardo Viola y Liliana De Riz, analizan detenida e inteligentemente las alternativas del período 1973-1976. Los trabajos de Landi ("La tercera presidencia de Perón: gobierno de emergencia y crisis política", en *Revista Mexicana de Sociología*, 78, 1978, p. 4) y Adolfo Canitrot (*La viabilidad de la democracia, un análisis de la experiencia peronista, 1973-1976*, Buenos Aires, CEDES) tratan aspectos más específicos del período y constituyen también aportes significativos para su comprensión.

ampliada, de los acuerdos entre asociaciones gremiales de trabajadores y empresarios que habían comenzado a estructurarse durante el último par de años del anterior gobierno peronista. Como en aquella ocasión, se convocó a las entidades gremiales confederales, la CGT y la Confederación General Económica (CGE), a que acordaran los niveles generales de aumentos salariales, comprometiéndose a respetarlos durante su vigencia y a someterse al arbitraje final del Estado en caso de eventuales desacuerdos. En varios aspectos la situación era más propicia que la de veinte años atrás. Por una parte, la coyuntura económica resultaba favorable debido a los buenos precios de los exportables en el mercado internacional y al apreciable margen de la capacidad ociosa existente en el sector industrial. Por la otra, la CGE de principios de la década del 70 era una organización mucho más extendida y representativa que la versión original creada por el mismo José Gelbard. A su capacidad de aglutinar vastos segmentos del pequeño y mediano empresariado, la CGE había sumado asimismo la presencia de grandes empresas de capital nacional —de las cuales el grupo dirigido por Gelbard era un buen ejemplo— y, en las vísperas de la llegada del peronismo al poder, las cámaras agrupadas en la tradicionalmente antiperonista Unión Industrial Argentina que se autodisolvió y fusionó a la CGE. Si bien esto último, en todo caso, constituyó un repliegue táctico de los empresarios que habían controlado la central empresarial de signo liberal, también contribuyó a conferirle mayor legitimidad a Gelbard, quien pudo asumir el ministerio de Economía del gobierno peronista contando con el respaldo de prácticamente todo el frente empresarial.

Distinta era la situación, en cambio, en el campo sindical. En él, la conducción vanderista, que seguía al frente de la CGT, había perdido terreno desde 1968 en favor de grupos de oposición y activistas de planta quienes, cubriendo un espectro que iba desde el peronismo combativo hasta posiciones independientes y marxistas revolucionarias, le reprochaban a la vieja camada dirigente sus claudicaciones frente al Estado y las patronales. La campaña electoral que culminó con la elección de la fórmula de Cámpora y Solano Lima reafirmó la declinación de los sindicalistas y el auge de la izquierda peronista, dentro de la cual los Montoneros habían anunciado expresamente que su objetivo era la exterminación física de los dirigentes sindicales. Si bien la suerte de los sindicalistas, y de sus enemigos de dentro y fuera del peronismo, comenzó a revertirse a partir del golpe en contra de Cámpora, que los mismos sindicalistas contribuyeron a producir, los primeros meses del gobierno peronista se caracterizaron por un auge de las movilizaciones de trabajadores, que a menudo se orientaron en contra de los gremialistas de cuño vanderista.³¹

En definitiva, el acuerdo entre sindicalistas y empresarios, el Pacto Social, fue firmado a los pocos días de llegado Cámpora a la presidencia, estableciéndose en él un moderado aumento de salarios y su posterior congelación, además de

31. Elizabeth Jelin analiza exhaustivamente los conflictos laborales producidos durante el gobierno peronista y destaca la situación de semiostracismo en la que se encontraba la dirigencia sindical dentro del peronismo en el momento de la asunción de Cámpora (E. Jelin, "Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976", Buenos Aires, CEDES, Documento de Trabajo N° 5, 1977, p. 8).

... la suspensión de los mecanismos de negociación colectiva salarial por un plazo de dos años y su reemplazo por un compromiso del Ejecutivo de implementar las medidas necesarias para mantener el poder adquisitivo del salario... El Pacto Social incluía también medidas en otras áreas de política económica, además de la distribución del ingreso y el control de precios.³²

El proyecto de Perón, asimismo, apuntó al establecimiento de un segundo conjunto de articulaciones que resultaba inédito dadas las tradiciones antiparlamentarias del peronismo y el antagonismo que históricamente lo había enfrentado a las otras corrientes partidarias argentinas. El propósito era el de convertir al Parlamento en un ámbito real de negociación entre los partidos, revirtiendo así la tendencia del peronismo a conferirle un aura de ilegitimidad tanto a las críticas opositoras como a las aspiraciones de los partidos de oposición de invocar intereses y orientaciones populares.

El rescate del Parlamento como ámbito de negociación y la propuesta implícita de crear un sistema de partidos representativo iba en contra del movimientismo del peronismo de la primera época. Este componente autoritario de la ideología y prácticas del peronismo, al que aparentemente Perón había renunciado en vísperas de su retorno al poder, era, sin embargo, reivindicado por importantes sectores del peronismo. Estos sectores sostuvieron posiciones diametralmente opuestas —desde el jacobinismo revolucionario de la guerrilla hasta las distintas variantes del autoritarismo de derecha apoyadas por segmentos del sindicalismo y por los grupos fascizantes congregados en torno del secretario privado de Perón, López Rega—; sin embargo, todos ellos coincidieron en sus condenas a la "partidocracia" y a los formalismos de la democracia liberal. Fue por ello que los principales apoyos que encontró Perón a su proyecto de revitalización del parlamento y los partidos estuvieron fuera del peronismo; ellos fueron el radicalismo, con cuyo líder, Balbín, Perón celebró una reconciliación histórica a fines de 1972, y los grupos más importantes de la derecha y la izquierda parlamentarias, la Alianza Popular Federalista y la Alianza Popular Revolucionaria.

Obviamente, la reconciliación entre el peronismo y el radicalismo no fue solamente el resultado del viraje ideológico de Perón; él respondió asimismo al cambio en las actitudes de los radicales, quienes comprendieron que la realización de la democracia en la Argentina pasaba necesariamente por la plena integración del peronismo a la vida política. Esto exigía que los radicales dejaran de lado el apoyo que, tibia o cálidamente, habían prestado a las cláusulas proscripivas impuestas por los militares desde 1957. En ese sentido, la propuesta de Onganía de abolir la política obró como un catalizador del reencuentro en un terreno común de los polos antagónicos de la política partidaria argentina, que habían sido ejes entre 1955 y 1966 de los dos campos de un sistema político escindido y cuya norma de funcionamiento había sido la reproducción de su propia crisis.

Finalmente, la propuesta de Perón contempló la redefinición del rol de las

32. Elizabeth Jelin, "Conflictos laborales...", p. 8.

Fuerzas Armadas, tratando de quebrar el estilo de acción que había llevado a éstas a intervenir recurrentemente en la política. Para ello procuró, por un lado, preservar una esfera de autonomía corporativa, lo que también introdujo un importante cambio con respecto a las "fuerzas armadas peronistas" que se había pretendido crear entre 1946 y 1966, período durante el cual se apeló a purgas, juramentos de lealtad al régimen y promociones politizadas. Por el otro lado, y como contrapartida complementaria de lo anterior, Perón, aprovechando la inercia generada por la derrota política de los militares, procuró que éstos se subordinaran efectivamente a las autoridades constitucionales del Estado, cuya cúpula pasó a ser ocupada por el viejo líder. A esas alturas resultó paradójicamente propicio, desde el punto de vista de la valorización de la figura de Perón en relación con los militares, que la llegada de aquél a la presidencia hubiera sido precedida por el breve interludio camporista. Las movilizaciones populares que se multiplicaron a partir del 25 de mayo y la elección y el nombramiento de algunos funcionarios que respondían a la izquierda peronista —sobre todo en algunas administraciones provinciales y en las universidades— realizaron la moderación de Perón y el tono y el contenido de los mensajes que éste comenzó a emitir a partir de su nuevo retorno al país del 20 de junio. Estos mensajes pasaron a enfatizar la necesidad de privilegiar la participación organizada y canalizada a través de los cauces "naturales" por sobre las movilizaciones populares inorgánicas y a reafirmar los preceptos tradicionales de la doctrina justicialista en detrimento de las temáticas del socialismo nacional y la guerra revolucionaria impulsadas por la izquierda y a las cuales Perón había prestado eco a menudo durante los últimos años de su exilio.³³

El complejo andamiaje político-institucional concebido por Perón fue apoyado por algunos sectores minoritarios del peronismo político y sindical, por la mayoría de los aliados del peronismo en el FREJULI y por la principal oposición partidaria, la Unión Cívica Radical. Sin embargo, el esquema no llegó a implantarse ni siquiera mínimamente, y el sucesivo desmoronamiento de sus engranajes, como bien señala De Riz, no sólo enhebró el proceso de licuación del gobierno peronista, sino también el de la desarticulación política del campo popular. Desde el punto de vista político, la consolidación del proyecto de Perón hubiera requerido una considerable disminución del grado de dramatismo de la política argentina. Para ello hubiera sido necesario desacelerar el tiempo político induciendo a los actores a privilegiar la eficacia a largo plazo de la reinstitucionalización de sus acciones en vez del impacto a corto plazo de triunfos espectaculares que se pudieran obtener sobre contendientes coyunturales. Dichos triunfos tuvieron, por supuesto, su contrapartida de derrotas que alienaron a quienes las sufrieron y, sobre todo, corroyeron la precaria legitimidad de las instituciones democráticas y parlamentarias; la resolución de los sucesivos enfrentamientos entre los distintos contendientes internos del peronismo se fue produciendo a costa de hacer estallar "desde adentro" a los

33. El ya citado Viola destaca la importancia de los cambios en las consignas de Perón a partir de los cruciales sucesos del 20 y 21 de junio de 1973 ("Democracia e autoritarismo...", pp. 410 y 411).

mecanismos parlamentarios y corporativos, determinando por ende su vaciamiento como posibles canales de negociación de los conflictos y para el procesamiento de acuerdos.

Los casi tres años del gobierno peronista presenciaron una constante aceleración del tiempo político que, si bien en un episodio nada trivial, como la muerte de Perón, reconoció una causa natural incontrolable, en la mayor parte de los casos fue resultado de la premura de los actores internos del peronismo por consolidar sus ganancias inmediatas y desalojar a sus adversarios de toda posición de poder, sin reparar en el costo resultante. Así, sobre el trasfondo de la intensificación del terrorismo guerrillero y paraestatal, se fueron proyectando episodios que, además de dilucidar enfrentamientos, fueron minando la viabilidad del gobierno constitucional y, por ende, del régimen democrático; la salvaje limpieza de los sectores de izquierda, el Navarrazo, o sea, la destitución del gobernador y vice de Córdoba por el jefe de la Policía provincial, convalidada por el Ejecutivo nacional ejercido por Perón, la liquidación de Gelbard, el Rodrigazo, la defenestración de López Rega y su camarilla y la renuncia del ministro de Economía Cafiero ante el sabotaje sindical a su programa fueron algunos de los ejemplos más importantes de tal consecuencia.

Los jefes sindicales, y principalmente los dirigentes que controlaban las 62 Organizaciones, fueron precisamente uno de los actores que contribuyeron más decisivamente a generar un patrón político en el que predominaron las consideraciones de corto plazo y la despreocupación por la consolidación institucional. En ese sentido, y con la excepción parcial de los meses en los que Perón ocupó la presidencia, los dirigentes sindicales no se apartaron mayormente de las tácticas defensivas y oposicionistas que habían aprendido y ejercitado desde 1956 frente a gobiernos que proscribieron al peronismo. Ante la amenaza que las oposiciones sindicales representaron para su predominio, los dirigentes de las 62 y la CGT reaccionaron no solamente impulsando una mayor centralización del aparato sindical —lo que les significó mayor poder para controlar tanto a las bases obreras como a los disidentes— sino también minando esfuerzos, como los de Gelbard y Cafiero, de vincular la política de ingresos a las otras variables fundamentales de la economía. Parece exagerado, en consecuencia, caracterizar el proyecto de los dirigentes gremiales como un programa autoritario movilizador sindicalista orientado a determinar la naturaleza del sistema político global.³⁴ El programa sindical tuvo solamente, en realidad, proyección sectorial, manteniendo, eso sí, la capacidad de bloquear proyectos más globales como los impulsados por la izquierda peronista, por Perón y por los sectores fascistizantes agrupados en torno de López Rega.

Hacia mediados de 1975 ya habían sido excluidos de la lucha por el poder, y pulverizados políticamente, la izquierda peronista y los sectores empresariales y políticos vinculados a Gelbard. A esa altura, la camarilla agrupada en torno de López Rega intentó liquidar al único contendiente de peso que se le oponía dentro del peronismo, o sea, la dirigencia sindical. La operación, tanto en lo

34. Viola propone una interpretación en la que los objetivos políticos de los dirigentes sindicales son equiparados a los de camarilla fascizante de López Rega ("Democracia e autoritarismo...", p. 428).

económico como en lo político, tuvo características inéditas para un gobierno peronista. Por un lado, se procuró contener mediante un retraso salarial la desenfrenada carrera de precios y salarios desatada desde 1974. Por el otro, se trató de lograr la involucración de las Fuerzas Armadas —a través de la designación de un oficial en actividad como ministro de Interior y de un comandante en jefe del Ejército partidario del “profesionalismo integrado” — con la pretensión de que los militares se convirtieran en el sostén principal de un régimen político que tendiera inexorablemente a la liquidación completa de las instituciones parlamentarias y de las libertades públicas.³⁵ La operación política concebida en torno al Rodrigazo resultó en un descalabro total que culminó con la defenestración de López Rega y de sus asociados más cercanos y el irreparable deterioro de la figura de Isabel Perón.³⁶ Sin embargo, ella constituyó un importante hito de la historia del gobierno peronista, pues marcó el momento en que las Fuerzas Armadas recuperaron plenamente la iniciativa política, y junto con ellas, los sectores de la gran burguesía que habían quedado a la defensiva desde 1973. A partir del tercer trimestre de 1975, los militares, que ya habían ganado un espacio considerable desde principios de ese año al serles asignada la responsabilidad de la represión de la guerrilla en la provincia de Tucumán, empezaron a manejar el tiempo de la política en función de un proyecto de liquidación del régimen democrático que iba mucho más allá de la coparticipación que, cada vez más desembozadamente, les ofrecía Isabel Perón.

Durante el lapso que medió entre el Rodrigazo y la caída de Isabel Perón en marzo de 1976 se fue configurando aceleradamente el síndrome de una sociedad desgobernada. Por una parte, esto consistió en la completa desarticulación del frente de fuerzas que se había expresado a través del FREJULI y del arco de partidos parlamentarios que compusieron la oposición leal a su gobierno, es decir, el radicalismo y la Alianza Popular Revolucionaria, fundamentalmente. El plano más visible del proceso fue la descomposición misma del gobierno peronista; éste perdió totalmente el contacto con la sociedad, quedando despojado de toda posibilidad de regular o influir sobre los procesos sociales en medio de una sucesión de episodios de histeria presidencial, complotes palaciegos y parálisis de las cúpulas del Parlamento y los partidos. En un nivel más profundo, la desarticulación abarcó el plano de la política global, ésta se redujo a la salvaje confrontación de Fuerzas Armadas y a la caza de víctimas indefensas, la violencia se transformó en el recurso cotidiano, y casi exclusivo, mientras la abrumadora mayoría de los sectores movilizados a partir de 1969 completaron una parábola de desactivación y de repliegue al cual contribuyeron, en dosis comparables, la decepción ante la crisis y el fracaso del peronismo y el miedo. Los comportamientos económicos de las principales clases sociales mantuvieron un paralelismo con la política: la búsqueda de la negociación y el acuerdo

cesó prácticamente por completo y tanto los trabajadores como los empresarios tornaron a vivir al día. Los primeros procuraron que los salarios no se retrasaran excesivamente, lo que llevó a las dirigentes gremiales a demandar reajustes cada vez más frecuentes, contribuyendo de paso a que el gobierno perdiera los vestigios de autoridad y credibilidad que le quedaban. Los segundos desbordaron fácil y casi provocativamente todo control o regulación que el Estado pretendió imponer a los precios modificándolos cotidianamente, asimismo, paralizaron totalmente la inversión. Todo ello conformó un patrón de economía de saqueo que redondeó la imagen de caos e incertidumbre absoluta que ofrecía la sociedad argentina de fines de 1975 y principios de 1976.

Pero, por otra parte, la imagen de caos y desgobierno no fue simplemente el resultado de las torpezas y la ineficacia del gobierno y la parálisis de los actores ligados a él. A partir de mediados de 1975 esta imagen fue fomentada deliberadamente por los dos actores que, desde la política y la economía respectivamente, fueron constituyéndose en los censores severos y externos no sólo del gobierno sino también de toda una manera de organización de la sociedad argentina; es decir, las Fuerzas Armadas y la cúpula empresarial liberal que reaparece espectacular y exitosamente con la creación de la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). En efecto, unos y otros formularon críticas cada vez más demoledoras que, en principio, denunciaron a un gobierno incapaz de “poner orden”, tanto por su supuesta ineficacia en la represión como por su imposibilidad de regular los comportamientos de los distintos sectores sociales, incluso de aquellos que habían constituido su soporte social. Sin embargo, las críticas fueron mucho más allá, apuntando por elevación a toda una sociedad, con respecto a la cual el populismo —*qua* régimen político y *qua* estilo de comportamiento de las clases sociales fundamentales— fue postulado como arquetipo de un estilo de organización en el cual los actores, acostumbrados a la tutela de un Estado protector y omnipotente, desarrollaban conductas perniciosas que finalmente conducían a un estado de desorden cuya manifestación más diabólica era la subversión.

La negativa de las Fuerzas Armadas a involucrarse con un régimen en descomposición, prolongando una situación en la cual la sociedad argentina se vio sometida a niveles de desgobierno, incertidumbre y desquiciamiento económico sin precedentes hasta 1976, no sólo gratificó el antiperonismo visceral de la gruesa mayoría de los miembros de la corporación militar y de sus aliados sociales. Además, ello tuvo como objetivo dejar sentada una moraleja ejemplarizadora, sobre la cual pudiera basarse legítimamente la fundamentación de la propuesta de construcción de un orden social alternativo a la sociedad populista de “los últimos treinta años”. La cuestión pasaba a ser, entonces, la creación de una nueva sociedad y no simplemente la depuración y el ordenamiento de las modalidades de organización política de la vieja.

35. Landi señala que el “profesionalismo integrado” consistió en “... la definición tendencial [del Ejército] en favor, no ya de la defensa del Estado y del régimen constitucional, sino de la línea política del gobierno” (O Landi, “La tercera presidencia...”, p. 1403.)

36. El intento de reajuste drástico de la relación entre precios y salarios fue protagonizado por el ministro de Economía impuesto por López Rega, Celestino Rodrigo. De ahí lo de “Rodrigazo”.

*El golpe de 1976: revolución burguesa en contra de los burgueses...
y de los proletarios*

Como sugería en la sección anterior, en 1976 el diagnóstico de los militares argentinos tuvo un carácter más global que los que precedieron a las irrupciones en la política que las Fuerzas Armadas habían venido protagonizando desde 1955. En realidad, las sucesivas intervenciones militares fueron jalonando un *crescendo* de multiplicación de los planos de la sociedad argentina cuestionados por las Fuerzas Armadas, y paralelamente de intensificación del nivel de involucración militar que se estimó necesario para corregir los presuntos vicios. Así, mientras en 1955 y 1962 los militares se limitaron a impedir la continuación de regímenes políticos a los cuales se oponían, ya en 1966, como veíamos, la ideología golpista fue más allá y propugnó la instalación de un régimen no democrático sostenido, en última instancia, por las Fuerzas Armadas. En 1976, finalmente, la ideología del golpismo fue todavía más revolucionaria. Al proyecto de establecer un gobierno de las Fuerzas Armadas, y no meramente apoyado *por* ellas, se agregó la visión de la necesidad de producir un cambio profundo en la sociedad argentina.

El desafío de la guerrilla y la aguda crisis social que durante varios años se superpuso con ese desafío fueron interpretados por los militares como la manifestación de una sociedad enferma —y por lo tanto indefensa frente a la penetración del virus subversivo— cuyos orígenes se remontaban a 1945, e incluso a 1930. Desde esta visión el populismo y el desarrollismo modernizante aparecieron como las dos caras de una misma moneda. El primero había predominado entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1976, pero además durante 1955 y 1973 había estado presente como oposición de los sucesivos proyectos desarrollistas. Esta oposición había sido inicialmente derrotada, pero finalmente había rebotado triunfalmente contribuyendo al bloqueo de los proyectos desarrollistas a menudo apoyados por los militares e impidiendo su consolidación. La otra cara de la moneda, es decir, el desarrollismo, había intentado dos veces —en 1959 y en 1967— alterar los términos de la relación de fuerzas intentando favorecer a los sectores más concentrados de la burguesía, nacional y extranjera, y las nuevas clases medias asociadas a la expansión de los servicios y consumo más modernos en desmedro de los sectores populares y los segmentos más atrasados de la burguesía. Sin embargo, como hemos visto, el desarrollismo no se había propuesto en modo alguno alterar la ecuación social básica de la Argentina. Para el diagnóstico de los militares de 1976, una de las pruebas más contundentes de los límites del desarrollismo, y en definitiva de su confluencia con la premisa básica del populismo —es decir, la utilización del crecimiento industrial como eje dinámico de la economía argentina—, fue el hecho de que el desarrollismo no dejó de propiciar un pacto con el sindicalismo peronista, demandándole o imponiéndole sacrificios, pero al mismo tiempo sentando las bases para la creación y expansión de su formidable poder organizativo: Frondizi en 1958-1962, al sancionar la ley de asociaciones profesionales, que reafirmó la vigencia del principio del sindicato único por rama de actividad y de la central obrera única, y devolviendo la CGT a los sindicalistas

peronistas; Onganía en 1966-1970, al no derogar aquella ley y expandir significativamente el sistema de obras sociales que otorgó a los sindicatos el control de una voluminosa masa de recursos.³⁷

En síntesis, para los militares victoriosos de 1976 el desarrollismo se transformó, *malgré lui*, en el correlato del populismo. La condena simultánea dejó el campo abierto a los postulados liberales y a sus sostenedores.

¿Cuáles fueron las razones para que el liberalismo se impusiera tan decisivamente? En primer lugar, los liberales pudieron aducir su inocencia en relación con las políticas económicas implementadas desde 1943. Si bien después de la caída de Perón algunas de las figuras del elenco liberal, como Verrier, Alsogaray, Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Pinedo, habían alcanzado a encaramarse en la cima de la conducción económica, ellos pudieron argüir que nunca habían tenido la vía libre para ejecutar a fondo las “verdaderas” políticas liberales. Así, en 1956-1957 y 1962-1963, los liberales controlaron fugazmente las carteras económicas de gobiernos militares; sin embargo, éstos fueron breves e internamente contradictorios y, por lo tanto, no pudieron darle continuidad a sus políticas. Tampoco en 1959-1961 y 1967-1969, cuando Alsogaray y Krieger Vasena fueron ministros de Economía por períodos un tanto más prolongados en el contexto de gobiernos cuya estabilidad era presumiblemente mayor, se llegó a implementar el programa liberal.

En ambos casos, los respectivos ministros tuvieron que ejecutar sus políticas en el contexto de administraciones cuyos titulares, Frondizi y Onganía, no compartían los preceptos del liberalismo. Los dos presidentes, por ende, concibieron la gestión de sus ministros liberales como un interludio cuyo fin sobrevendría una vez que se cumplieran los objetivos a los que sirvieron las respectivas designaciones, el alivio de las presiones militares, en un caso, y la “estabilización” económica, en el otro. En consecuencia, durante la década del 60, las políticas de los ministros liberales fueron a menudo saboteadas por otros sectores de los propios gobiernos y, además, fueron implementadas bajo la permanente espada de Damocles que pendió sobre sus ejecutores. No casualmente, y a pesar del control que ejercieron sobre las respectivas políticas económicas, ni Alsogaray ni Krieger Vasena pudieron nunca cuestionar la premisa básica de las políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, el énfasis puesto en la industrialización. A su llegada al Ministerio de Economía Martínez de Hoz pudo, entonces, reclamar creíblemente que les había llegado el turno a aquéllos a quienes se les había negado por más de treinta años.

No todo se limitó, empero, a que los liberales pudieran exhibir un pasado sin mácula, relativamente hablando, se entiende. En la Argentina de mediados de la década del 70 la ideología liberal tuvo una virtud adicional que resultó fundamental para garantizarle audiencias más nutridas y predisuestas dentro de las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia argentina contemporánea los viejos preceptos liberales —es decir, la reivindicación del mercado como mecanismo exclusivo de asignación de recursos y la crítica de las industrias

37. No fue casual que el mismo funcionario, Rubens San Sebastián, fuera quien desde la subdirección de Relaciones del Trabajo y la secretaría de Trabajo respectivamente estuviera por detrás de las políticas implementadas hacia los sindicatos bajo Frondizi y Onganía.

“artificiales” y del “excesivo” intervencionismo estatal— tendieron a armonizarse con el pensamiento militar, proporcionando una filosofía fundante a una reformulada doctrina de seguridad nacional. Desde el momento en el que surgieron los primeros esbozos de esa doctrina —bajo la argumentación de la creación de las fronteras ideológicas— allá a fines de la década del 50, los temas liberales habían atraído y repelido, a la vez, a los sectores hegemónicos dentro de las Fuerzas Armadas. El liberalismo había sido la única corriente consecuentemente antiperonista y, además, había virado consonantemente con la profundización antidemocrática que los militares habían protagonizado a partir de 1958. Sin embargo, y como bien destaca O'Donnell,³⁸ de las doctrinas liberales se desprende una serie de consecuencias que habían repugnado tradicionalmente a los militares: el redimensionamiento industrial, la revalorización del mercado de capitales y la crítica de las prácticas nacionalistas y estatistas. En 1975-1976, finalmente, los liberales pudieron articular un discurso en el que se integraron tres núcleos temáticos que hasta entonces habían permanecido dispersos, y que definieron la matriz del orden a erradicar: la *subversión* —caracterizando como tal no simplemente a las acciones guerrilleras sino también toda forma de activación popular, todo comportamiento contestatario en escuelas y fábricas y dentro de la familia, toda expresión no conformista en las artes y la cultura, y, en síntesis, todo cuestionamiento a la autoridad; la *sociedad política populista*— el peronismo, los sindicatos, las oposiciones “complacientes” (es decir, los radicales y la izquierda parlamentaria) y el Estado tutelar; y, por último, la economía urbana apoyada en la dinámica del *sector industrial*, y sus soportes sociales básicos, una clase obrera “indisciplinada” y un empresariado “ineficiente”.

Contrariamente a lo que una visión poco informada acerca de la naturaleza del liberalismo argentino pudiera suponer, el recetario liberal de 1976 enfatizó la idea del Estado fuerte.³⁹ Partiendo de una política del Estado democrático populista-desarrollista como un Estado débil sometido a los vaivenes de las excesivas demandas sectoriales e incapaz, en el límite, de poner coto al caos y a la subversión, los liberales reivindicaron la necesidad de que el Estado subordinara los privilegios sectoriales —es decir, las conquistas sociales según la terminología a superar— y los derechos y las garantías individuales a la “razón de la guerra” contra la subversión, sus aliados y las costumbres sociales y comportamientos económicos que constituían su “caldo de cultivo”. Por un lado, se trataba, entonces, de caracterizar a la Argentina como una sociedad en guerra, con lo que se configuraban como prioritarias las tareas militares de extirpación del cáncer subversivo en todas sus ramificaciones. Las Fuerzas

38. Cf. G. O'Donnell, “Las Fuerzas Armadas y el Estado...”, p. 214.

39. Por supuesto que en este sentido el liberalismo argentino contemporáneo no hace más que retornar a fuentes a las que a menudo pretende olvidar. Como bien acota Norbert Lechner (*Acerca de la razón de Estado*, Santiago de Chile, FLACSO, 1981, pp. 24 y 259) los teóricos originales del liberalismo, y también los que lo practicaron, desencadenaron la articulación de una sociedad capitalista moldeada por la economía de mercado no como un proceso natural sino puesto en marcha por el Estado. “El panóptico de Bentham es la expresión más típica de ese Estado vigilante que *disciplina a la sociedad* en nombre de la libertad individual” (el subrayado me pertenece).

Armadas, por ende, fueron presentadas como “responsables principales y últimas del destino nacional”, con una serie de manifestaciones institucionales y simbólicas de tal preeminencia: la negación absoluta y a menudo explícita del estado de derecho, la suplantación de los poderes constitucionales del gobierno por las tres armas, que se repartieron hasta el último cargo de intendente del pueblo más remoto y sus prebendas, y el ejercicio del poder supremo del Estado por la junta de comandantes en jefe y no por un déspota semimonárquico al estilo de Onganía o Pinochet.⁴⁰ Los militares y sus mandatarios quedaron asimismo a cargo de detectar y castigar todas las formas de comportamiento contestatario, o meramente crítico, en los distintos ámbitos de la sociedad civil, las que fueron condenadas como excrecencias foráneas que contradecían la utopía reaccionaria de una sociedad rígidamente estamentada. Sin embargo, la cosa no se detuvo ahí; por el otro lado, el Estado se perfiló como el instrumento fundamental en la subversión del “viejo orden” populista, interviniendo activamente para “destruir el modo de acumulación hacia el cual la economía se inclinaba naturalmente” después de más de cuarenta años durante los cuales las distintas clases habían internalizado gradualmente comportamientos que presuponían, entre otras cosas, el Estado tutelar, los precios sociales, la economía semicerrada y el mercado de capitales regulado.⁴¹

La verdadera revolución que proponían los liberales exigía, en principio, que el Estado se disciplinase a sí mismo, eliminando empresas públicas y empleos “superfluos”, desmantelando los sistemas de subsidios y absteniéndose de fijar precios sociales para sus servicios. Pero, además, y fundamentalmente, de lo que se trataba era de destruir los “viejos hábitos” de trabajadores y empresarios y generar nuevos. Esta consigna genérica, ciertamente, no fue concebida para que tuviera consecuencias simétricas para unos y otros. En el caso de los trabajadores, la apelación a la idea del mercado, es decir, de un universo en el cual sus componentes son átomos, y se conciben como tales, respondió al propósito de destruir los mecanismos mediadores, principalmente los sindicatos y las estructuras de representación obrera en las plantas, que habían permitido a obreros y empleados promover sus intereses y presionar al Estado y a la patronal a partir de definirse como integrantes de un sujeto colectivo. La disolución de las centrales empresariales y de trabajadores y la intervención de los gremios fue presentada por el gobierno militar como una depuración de una de las numerosas ramificaciones del Estado corporativo populista con conse-

40. De paso, la asunción del poder supremo del Estado por los comandantes en jefe de las tres armas reflejó la capacidad de aprendizaje de los militares argentinos, quienes quisieron evitar la repetición de la experiencia de Onganía. Como se observó antes, entre 1966 y 1977, Onganía, un ex caudillo militar en ejercicio de la presidencia que no fue sometido a tipo alguno de control formal o institucional, perdió contacto vertiginosamente con sus camaradas de armas.

41. La cita ha sido extraída de un trabajo del economista brasileño Francisco de Oliveira, quien en su discusión de los cambios ocurridos en Brasil y en la economía mundial en la década del 30 elaboró imágenes muy sugerentes. A pesar de que Oliveira se refiere al proceso inverso que nuestros liberales quisieron promover a partir de 1976, muchas de sus observaciones se aplican. El período de transición, dice Oliveira, exige que el Estado cave un “nuevo lecho del río”, el que, una vez creado, permite que el proceso de acumulación se oriente, con un cierto grado de automaticidad, de acuerdo con los nuevos parámetros (“La economía brasileña: crítica a razão dualista”, Seleções CEBRAP, 1, p. 14).

cuencias parejas para todos en la medida que se afectaba tanto a uno como a otro actor en el proceso de producción. Sin embargo, los efectos de la irrupción del Estado fueron particularmente perjudiciales para el movimiento obrero. Esto se debió, en buena medida, a las modalidades de constitución de la clase trabajadora argentina como sujeto colectivo. Su emergencia como tal estuvo enmarcada por el desarrollo de un movimiento sindical de nivel nacional, que alcanzó la posibilidad de formular las demandas de los trabajadores a través de sus organizaciones de segundo y tercer grado. A su vez, la cohesión del movimiento había sido fortalecida por el cemento ideológico provisto por el peronismo, tanto en su etapa de fomento de las organizaciones sindicales masivas (1945-1955) como durante el periodo en el que constituyó el principal núcleo integrador del oposicionismo obrero (1955-1979). Asimismo, la disolución simultánea de la CGT y la CGE alteró radicalmente el tanteador en favor de la puja social en favor de la burguesía debido a una razón más general. Mucho más que en el caso de otras clases sociales, la fuerza de la clase obrera depende de sus posibilidades de actuar colectivamente. En cualquier sociedad capitalista la fuerza de trabajo está atomizada en el interior de cada firma individual, mientras que el capital se encuentra ya integrado bajo un comando único.⁴² La creación de sindicatos y de otras formas de asociación obrera no es sólo teórica, sino también históricamente una respuesta a la "asociación" que ya ha tenido lugar del lado del capital.⁴³ En consecuencia, un proceso de atomización que debilita la capacidad de asociación de ambas clases inevitablemente trae como resultado reducir considerablemente más el poder de negociación de los trabajadores que el de los empleadores.

Los resultados de las políticas del gobierno militar en el campo obrero fueron espectacularmente exitosos. Los años de Videla marcaron el periodo más extenso de inactividad sindical desde 1943.⁴⁴

La transformación económica proyectada por los liberales, como veíamos antes, no se limitaba empero a "poner en su lugar" a la clase trabajadora obligando a sus integrantes a negociar salarios y condiciones de trabajo de manera atomizada y, por lo tanto, desventajosamente.⁴⁵ El objetivo más global

42. Offe y Wiesensthal argumentan persuasivamente que "... la individualidad de la fuerza de trabajo viva [...] es la causa de que emerja una relación de poder entre el trabajo y el capital. Este último, normalmente, agrupa muchas unidades de trabajo «muerto» bajo un comando unificado, mientras que cada trabajador individual sólo controla una unidad de fuerza de trabajo y, más aún, tiene que venderla bajo condiciones de competencia con otros trabajadores que, por su parte, tienen que hacer lo mismo. En otras palabras, la forma *atomizada* del trabajo vivo, que se encuentra en conflicto con la forma *integrada* o líquida (trabajo «muerto») de cada firma está siempre unido desde el principio, mientras que el trabajo vivo está atomizado por la competencia. *Los trabajadores no pueden «fusionarse»; a lo sumo, pueden asociarse* con el fin de compensar parcialmente la ventaja de poder que el capital deriva de la liquidez del trabajo «muerto»" (énfasis de los autores) (cf. Claus Offe y Helmut Wiesensthal, "Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on Social Class and Organization Form", en *Political Power and Social Theory*, vol. 1, p. 74).

43. Ibidem.

44. Cf. Francisco Delich, "Desmovilización social, reestructuración obrera y cambio sindical, Buenos Aires, mimeo, s./d.

45. Inicialmente, además, la represión a los sindicatos y a los activistas obreros fue acompañada por

fue el de modificar el sistema todo de relaciones sociales. Para ello, por lo tanto, también había que reformar a los empresarios. La estrategia adoptada fue la de la instauración de un sistema económico de libre mercado a través, principalmente, de la apertura del mercado interno a la competencia exterior, partiendo de la constatación de que

... bajo un sistema de protección, las actividades productivas locales gozan de un margen de protección excedente que hace del precio de competencia de la oferta externa un límite superior virtual pero no efectivo. Por debajo de ese límite las empresas, no individualmente, pero sí como conjunto dentro de una determinada actividad, gozan de la facultad de fijar sus propios precios. Pueden ajustar precios a costos sin restricciones de competencia. Esto hace posible que las empresas y los asalariados convengan entre sí salarios y precios dentro de cada una de las ramas de la producción con exclusión de todo otro interesado (gobierno, clientes y consumidores). El instrumento es el convenio colectivo de trabajo... y los concertantes son las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores. La protección aparece, entonces, como la razón económica última de la legitimación de las organizaciones sindicales su vigencia desde la década del 30, como la explicación histórica del vigoroso desarrollo que éstas alcanzaron.⁴⁶

En ese sentido, a pesar de su brutalidad, el retraso salarial inicial no carecía de antecedentes —como el de 1959— y las novedades doctrinarias recién comenzaron a producirse desde mediados de 1977. Una de las instancias decisivas fue la reforma financiera sancionada en junio de 1977, que implicó prestar

... atención excluyente al problema inflacionario [tomando] decisiones expresamente dirigidas a cortar el proceso de auge económico [no dudando] en herir los intereses inmediatos de los miembros de las clases sociales que configuraban la sustentación política [del gobierno militar].⁴⁷

El hito crucial, de todas maneras, lo constituyó la adopción de la política de tipo de cambio futuro pautado en diciembre de 1978; dicha política apareció como el desiderátum en materia de política antiinflacionaria y terminó llevando a la economía argentina a un callejón sin salida que la sumió en la crisis más profunda de su historia. Independientemente de la euforia consumista que el dólar barato generó en ciertos sectores sociales y de la contribución que estos consumos hicieron a la generación de la crisis, lo más significativo fue que el grueso de los empresarios continuó comportándose como antes de 1978 y que la formación de los precios reflejó la persistencia de los patrones de cálculo

una medida escasamente "liberal": el congelamiento de los salarios. Esto coadyuvó a una drástica caída del salario real. "Sobre la base de un índice 100 para 1970, los salarios reales descendieron de 104,6 en 1975 a 65,0 en 1976 y 62,7 en 1977 y 1978", A. Canitrot, *Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica en la Argentina, 1976-1981*, Buenos Aires, CEDES, 1989, p. 23.

46. A. Canitrot, *Teoría y práctica del liberalismo...*, p. 7.

47. Ídem, p. 26.

empresarial previos.⁴⁸ Como señala Canitrot,

... [no se logró] regular el mercado de trabajo a través de los precios industriales sometidos a la competencia externa, de modo de suprimir el sistema de fijar salarios y precios en la industria mediante los convenios colectivos de trabajo [...] La presencia de un sector de bienes intrínsecamente no comerciables y la dualidad en la formación de precios [hicieron] imposible lograr la regulación "externa" de los precios.⁴⁹

Este fracaso no hizo más que resaltar la resistencia del viejo modo de acumulación —el de la economía semicerrada y el Estado asistencialista— a ser destruido y estuvo en la raíz del epílogo totalmente diferente que tuvo el Proceso de Reorganización Nacional en comparación con el anterior régimen militar. Mientras que la utopía de una sociedad gobernada por administradores omniscientes que soñó Onganía naufragó como resultado de los embates a los que la sometieron las clases y sectores sociales que constituyeron sus víctimas, la vuelta al mercado y a sus modos de disciplinamiento "natural" no se materializó debido a que sus propios beneficiarios no se comportaron de acuerdo con las expectativas de los tecnócratas liberales y sus socios militares.

El epílogo de la experiencia militar iniciada en 1976, aún no concluida en el momento de escribirse estas páginas, ha reiterado viejos vicios de las Fuerzas Armadas argentinas y agregado algunos nuevos. Así, durante 1981 y 1982 se fueron revelando, en toda su magnitud, la barbarie de la represión, el gangsterismo que dominó la gestión pública a partir de 1976 y la incapacidad de las Fuerzas Armadas para respetar las normas que se habían dado a sí mismas para pautar las sucesiones presidenciales en el contexto del gobierno militar. Pero, además, los militares dieron un nuevo ejemplo de su ineficiencia en el manejo de la liberalización política de un régimen controlado por ellos, una vez tornados inviables los objetivos fijados inicialmente.⁵⁰

En efecto, la única sucesión ordenada producida dentro del régimen militar, es decir, el reemplazo del general Videla, sirvió para precipitar la ya inevitable defenestración de Martínez de Hoz y el abandono de sus políticas económicas. Este hecho abrió un convulsivo proceso durante el cual los sucesores de Videla, los generales Viola y Galtieri, pretendieron, cada uno de acuerdo con su estilo, ignorar que la suerte del régimen militar estaba irremisiblemente atada al éxito

48. Algunos indicios en apoyo de este hecho están surgiendo de un estudio en curso en el CEDES bajo la dirección de Roberto Frenkel, en el cual se apunta a la elaboración de un modelo cuantitativo para explorar los efectos de la aplicación de los instrumentos de estabilización elegidos durante el periodo del actual gobierno militar.

49. A. Canitrot, *Teoría y práctica del liberalismo...*, p. 43.

50. La liberalización consiste fundamentalmente de dos ingredientes: 1) la expansión de las arenas de contestación pública de las políticas gubernamentales a través de la eliminación, o atenuación, de las restricciones a las libertades de prensa, expresión y asamblea y la limitación de las prácticas ilegales del Estado, y 2) la institucionalización del régimen a través de la celebración de elecciones que sólo convalidan decisiones, sobre candidatos y/o políticas, tomada a través de mecanismos no democráticos. Un ejemplo de liberalización exitosa lo constituye el régimen militar brasileño con posterioridad a 1973.

de su política económica. Viola intentó imponerle un *tempo* reposado a la política y fue barrido por los embates producidos a raíz del descalabro del proyecto económico, y Galtieri, tras fracasar rápidamente en sus pasos iniciales en los cuales aspiró a retomar la ortodoxia económica liberal, apostó al todo o nada con la aventura de las Malvinas. El desastre militar en el Atlántico Sur no sólo contribuyó a la mutilación de otra generación de jóvenes argentinos y al agravamiento de la crisis económica.⁵¹ También consumió la última esperanza de la cúpula militar de redefinir las bases del poder del régimen y la forzó a convocar a los partidos políticos para convenir la entrega del gobierno a corto y cierto plazo. Paralelamente, los militares abandonaron toda aspiración a imponer condiciones al gobierno que los sucedería, excepto en lo referido a la "guerra sucia", con respecto a lo cual no renunciaron al objetivo de que sus sucesores no innovaran con respecto a lo dispuesto por el gobierno del general Bignone. Pero, más allá de cómo será resuelta la cuestión crucial de la represión ilegal, interesa preguntarse en qué condiciones se encuentra la política argentina en una coyuntura de transferencia del poder a un gobierno electo democráticamente, circunstancia ésta que, a esta altura, parece imposible que las Fuerzas Armadas puedan evitar. En respuesta a esta pregunta quiero, a manera de cierre de este trabajo, esbozar algunas ideas sobre las perspectivas del futuro político inmediato.

"Deflación de poder" y posibilidades de la democracia en la Argentina

En la Argentina de la segunda mitad de 1982 y principios de 1983 se asistió a una descomposición del régimen militar que llegó a límites inimaginables. El espectáculo de 1975-1976 fue reeditado en una versión aún más patética: una sociedad desgobernada, la desintegración del elenco dirigente y la economía totalmente fuera de control. La evaporación del poder militar, que no implicó un deterioro similar de su capacidad de fuego, no estuvo correlacionada, sin embargo, con el paralelo fortalecimiento de las oposiciones. Dada la precariedad del gobierno y de la situación militar, esta circunstancia no impedirá, seguramente, que se realicen elecciones relativamente limpias ni que se entregue el gobierno a los triunfadores en ellas. La debilidad de las oposiciones y la fragilidad de las alternativas políticas al régimen militar, más bien, agudiza el problema de la construcción colectiva de la democracia, posibilidad sólo facilitada, pero no garantizada —como lo ha enseñado repetidamente la historia argentina reciente— por el forzado repliegue de los militares.

Y es, precisamente, desde la perspectiva de la estabilización de un sistema político democrático que el panorama no es demasiado halagüeño. Esto es así no tanto porque se pueda presumir que los actores políticos que lideraron el proyecto de 1976, comenzando por los militares, se abstendrán en el futuro de sabotear un proceso de consolidación democrática. El obstáculo más crítico, en ese sentido, lo constituye el hecho de que el despliegue y la frustración de los

51. Adolfo Canitrot, "La experiencia populista de redistribución de ingresos", en *Desarrollo Económico*, 15-19, Buenos Aires, 1975, p. 7.

sucesivos proyectos de reorganización política y social estructurados a partir de 1966 han alimentado perversamente a una cultura política en la que, ya de por sí, prevalecían patrones de comportamiento social que afectan negativamente la posibilidad de afianzamiento de la democracia.

Ya a comienzos de la gestión del actual régimen militar la sociedad argentina estaba profundamente penetrada por valores y costumbres antidemocráticos: el culto a la violencia, la destrucción de los patrones de acuerdo implícito que contradictoriamente se habían generado entre 1955 y 1966, la falta de tolerancia por las conductas e ideas disidentes y el pensamiento crítico y el desprecio por el consenso. La vigencia de estos valores en la sociedad, y no meramente en los actores que articularon el proyecto de 1976, permitió que la cruzada purificadora de éste alcanzara un respaldo masivo, si bien probablemente no mayoritario. Este respaldo, en conjunción con la apatía y la privatización que constituyeron, en muchos casos, la respuesta adaptativa al miedo y la atomización, proporcionaron los ingredientes con los cuales se intentó conformar una nueva cultura política, más uniformemente autoritaria, que diera basamento sólido y a largo plazo al régimen militar. El fracaso en la conformación de esa nueva cultura política autoritaria no debe ocultarnos que aquellos valores perduraron y que, de alguna manera, fueron reforzados por la experiencia abierta en 1976, a pesar de que sus objetivos no fueron alcanzados. En efecto, la pretensión de que el mercado se constituyera en el principio universal y "natural" de *organización* social no tuvo éxito. Sin embargo, la sistematicidad e intensidad del intento tuvo profundos impactos en la sociedad argentina, reforzando los comportamientos atomísticos y no solidarios y debilitando las tendencias asociativas.

La *des-organización* social resultante torna aún más difícil una tarea que parece haber sobrepasado el límite de posibilidad de la Argentina, es decir, la estabilización de un sistema democrático. La futura coyuntura política argentina obligará al gobierno que surja de las próximas elecciones a transitar por un desfiladero muy estrecho que exigirá cuotas de inteligencia y sensibilidad políticas que, hasta ahora, no han sido exhibidas por los elencos dirigentes partidarios, sindicales y empresarios. Por un lado, sería necesario que emergiera un gobierno fuerte capaz de manejar dos cuestiones que, seguramente, serán fuente de innumerables dificultades: la puesta en vereda de las Fuerzas Armadas y la gradual resolución de la extremadamente difícil situación económica. Por el otro, la consolidación de un poder democrático requeriría imprescindiblemente que el gobierno no coartara ni reprimiera los impulsos que surjan de una sociedad que, al par de haber revelado sus ingredientes antidemocráticos, también ha demostrado reiteradamente el potencial de generar una cultura diversa y plural y su capacidad de cuestionar estructuras de autoridad ilegítimas y elitistas.